



Curso

"Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en el ámbito Jurídico"



UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO PRIVADO, LA EXTRANJERÍA Y EL DERECHO TRIBUTARIO

ÍNDICE

1. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO PRIVADO

1.1. El estatuto personal de las mujeres. Evolución histórica hasta la Constitución de 1978.

1.2. La Igualdad y la evolución del Derecho civil en España a partir de la Constitución de 1978.

1.2.1. Derecho Civil en general: reformas para eliminar la discriminación contra las mujeres en materia de capacidad jurídica, nacionalidad y adopción y primeras reformas en materia de Derecho de Familia.

1.2.2. Derecho de Familia: evolución de la regulación en materia de derechos y deberes en el matrimonio, filiación y apellidos y patria potestad; separación, nulidad y divorcio y sus efectos, régimen económico matrimonial, normas de Derecho Internacional Privado aplicables a la materia y Derecho de sucesiones.

1.2.3. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales o el llamado "Drittwirkung" en materia de Derecho privado.

2. LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL FENÓMENO DE LA EXTRANJERÍA

2.1. Perspectiva de género sobre el fenómeno de la inmigración.

2.2. Mujeres extranjeras y políticas públicas de igualdad en la materia (en materia de inmigración y de cooperación al desarrollo)

2.2.1. Instrumentos internacionales en materia de migración y género.

- 2.2.2. Normativa europea de referencia en migración y género.
- 2.2.3. Marco constitucional en España y principales políticas estatales.

2.3. El régimen general de extranjería desde la perspectiva de género.

2.4. El régimen específico de la ciudadanía comunitaria.

2.5. Política y legislación de asilo con relación al género

2.6. Previsiones específicas en materia de extranjería y violencia de género.

- 2.6.1. El Plan de atención y prevención de la violencia de género en población inmigrante (2009-2012).
- 2.6.2. Previsiones específicas en la legislación de extranjería relacionadas con la violencia de género.

3. LA IGUALDAD DE GÉNERO ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO

3.1. El principio de Igualdad en la normativa tributaria.

3.2. Los presupuestos con perspectiva de género.

- 3.2.1. La asignación del gasto.
- 3.2.2. El control del presupuesto.

3.3. Políticas públicas tributarias para favorecer la Igualdad

3.4. El tratamiento del género en el IRPF (tributación conjunta o separada, deducción por maternidad o nacimiento de hijos/as, etc.)

3.5. El tratamiento del género en otros impuestos.

- 3.5.1. Impuesto de Patrimonio.
- 3.5.2. Impuesto de Sociedades.
- 3.5.3. Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
- 3.5.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Para reflexionar...

Este era el primer paso para convertirse en una mujer virtuosa: Entendía asimismo los dos ideales confucianos que gobernaban nuestra vida. El primero lo formaban las Tres Obediencias: "Cuando seas niña, obedece a tu padre; cuando seas esposa, obedece a tu esposo; cuando seas viuda, obedece a tu hijo." El segundo correspondía a las Cuatro virtudes, que definen el comportamiento, la forma de hablar, el porte y la ocupación de las mujeres. "Sé sobria, comedida, sosegada y recta en tu actitud; sé serena y agradable en tus palabras; sé contenida y exquisita en tus movimientos; sé perfecta en la artesanía y el bordado. Si las niñas no se apartan de esos principios, se convierten en mujeres virtuosas."

Extracto de la novela "El abanico de seda", de Lisa See. La historia la cuenta Lirio Blanco y narra el ambiente y las costumbres que vivían las mujeres chinas en el siglo XIX. Una tradición terrible era deformar los pies de las niñas para que parecieran "lotos". Lirio Blanco decía de ellos:

"Siete centímetros –aproximadamente la longitud de un pulgar- es la medida ideal. A continuación viene la forma. Un pie perfecto debe tener la forma de un capullo de loto. Ha de tener el talón redondeado y carnosos, la punta aguzada, y todo el peso del cuerpo debe recaer únicamente sobre el dedo gordo. Esto significa que los dedos deben romperse y doblarse hasta llegar a tocar el talón. Por último, la hendidura formada por la punta del pie y el talón debe ser lo bastante profunda para esconder entre sus pliegues una moneda grande colocada de canto. Si yo podía conseguir todo eso, obtendría la felicidad como recompensa."

"Los vendajes cambiaron no sólo la forma de mis pies sino también mi carácter. Siento como si ese proceso hubiera continuado a lo largo de toda mi vida, convirtiendo a la niña complaciente en la niña decidida y, más tarde, a la joven que cumplía sin rechistar todo cuanto le ordenaba su familia política en la mujer de más alto rango del condado, que imponía estrictas normas y costumbres en el pueblo."

1. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO PRIVADO

Para poner en práctica...



¿Sabes si tu abuela podía tener una cuenta bancaria a su nombre o abrir un negocio libremente?



Hace cuarenta años, ¿tenían hombres y mujeres los mismos derechos y obligaciones respecto de sus hijos e hijas?



¿Existe hoy en día alguna diferencia legal a la hora de enfrentarse a una separación o divorcio?

1.1. EL ESTATUTO PERSONAL DE LAS MUJERES. EVOLUCION HISTORICA HASTA LA CONSTITUCIÓN DE 1978

En España, las mujeres no tuvieron reconocida legalmente la posibilidad de acceso a la educación universitaria hasta el año 1911. Además, su acceso anterior a la enseñanza primaria y secundaria solo se entendía de utilidad en la medida en que se consideraba mejor para la educación de los hijos e hijas o para que, en el caso de que tuvieran la desgracia de no casarse, se pudieran ganar la vida, primero como institutrices y, más tarde, como maestras.

El Estatuto de los funcionarios públicos de 1918 permitió a las mujeres incorporarse a la Administración del Estado, pero solo en la categoría de auxiliares.

Las Constituciones españolas, hasta la de la Segunda República, omitían toda referencia al principio de igualdad entre los sexos. En 1930, hubo una reforma legal que permitía a las mujeres ser elegidas pero no electoras. La Constitución de 1931 reconoció, por primera vez en nuestra historia, este principio, al establecer en su artículo 25 que: "No podrán ser fundamento de privilegio jurídico, el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas

políticas y las creencias religiosas" y aprobó el sufragio femenino, diciendo en su artículo 36 que "Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes", artículo al que se llegó tras un encendido debate en las Cortes de la Segunda República y gracias a la diputada Clara Campoamor.

La CE de 1931 planteaba que el matrimonio sería en igualdad y que podría disolverse por mutuo disenso, pero no dio tiempo a desarrollo legislativo. En esa época, aumentó el acceso de las mujeres a ciertas profesiones como la enseñanza y a formar parte del Jurado. Pero no cambió la legislación respecto de la mujer casada.

Durante la guerra civil de 1936-39 las mujeres se vieron afectadas, como el resto de la población. Durante la guerra, desempeñaron tareas que a veces la sociedad aún no les reconocía en tiempos de paz.

Durante la dictadura franquista, se produce un retroceso general en cuanto a la regulación de derechos y libertades de la población en general. En relación con las mujeres, se perdieron avances jurídicos alcanzados durante la República en ámbitos civiles, laborales y constitucionales.

Así, en el acceso a servicios de ocupación, se postergaba a todas las mujeres que no pudiesen acreditar ser "cabezas de familia". A modo de ejemplo, puede citarse que la principal norma reguladora del ámbito laboral durante este régimen, esto es, el Fuero del Trabajo de 14 de marzo de 1938, realizado antes de que acabara la guerra civil, ya señalaba, como una conquista del nuevo régimen, que este "liberara a la mujer casada del taller y de la fábrica".

Durante el régimen franquista, se deroga la ley del divorcio y se declara la nulidad de los segundos matrimonios celebrados al amparo de la legislación republicana y la ilegitimidad de esos hijos/as. Se aprueba una legislación protectora de las familias numerosas. Por Orden de 27 de septiembre de 1939,

respecto de mujeres que habían accedido a la función pública, se regulaba la posibilidad de que cada Ministerio determinara qué puestos no podían ocupar. Según la Sección Femenina, no podían las mujeres obtener títulos académicos si no cursaban "enseñanzas del hogar" a la vez.

Sólo se votaba a Concejales y votaban los cabezas de familia (1945 y 1948) y se permitía a las mujeres cabezas de familia, impedidos físicamente y mayores de 65 años excusarse de ir.

Regía el Código Civil español de 24 de julio de 1889, derivado del napoleónico, basado en la idea del "pater familiae" y de la subordinación de las mujeres. Consagraba la minoría de edad perpetua para las mujeres, sobre todo las casadas.

El Código Civil español fue objeto de diversas reformas parciales encaminadas a modificar la situación de partida de la mujer, que era de sometimiento permanente a la potestad del varón: padre, marido o tutor. La capacidad jurídica tenía que ver con el sexo de las personas y, sobretudo, el estado civil condicionaba esa capacidad, así como los aspectos patrimoniales de la relación.

Siguiendo los estudios del profesor Bernardo Moreno Quesada sobre "La condición de la mujer en el derecho español" publicado en un libro denominado "La condición social y jurídica de la mujer," editado en Granada, en 1975, vamos a ir examinando las situaciones jurídicas de las mujeres en todo el ordenamiento jurídico.

En los asuntos pecuniarios, el Código Civil era terminante: la mujer no podía, sin licencia de su marido, adquirir a título oneroso, ni lucrativo, ni enajenar sus bienes ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley; se designa al marido administrador único de los bienes del matrimonio, los gananciales, salvo estipulación en contrario y en lo referente a los parafernales (bienes propios de la mujer), así como en los

dotaes inestimados, no podía tampoco, sin licencia del marido, ni enajenar, ni gravar, ni hipotecar los mismos. No podía aceptar herencias ni pedir la partición de bienes.

Se realizaron dos reformas del Código que afectaron a esta situación, la de 24 de abril de 1958 y la de 2 de mayo de 1975.

➤ **Reforma de 24 de abril de 1958**

En ella, el poder legislativo se preocupó más de los aspectos personales que de los económicos y patrimoniales, pues la misma se hizo para adecuar la legislación al Concordato firmado con la Santa Sede en el año 1953. Las reformas más destacables consistieron en hacer que la mujer casada pudiera ser testigo en los testamentos y albacea testamentaria, así como ocupar cargos tutelares, con la autorización del marido, pero no fueron capaces de suprimir la licencia marital para la mujer casada, por entender que ésta reflejaba, según dice la propia Exposición de Motivos: "la posición peculiar de la mujer casada en la sociedad conyugal en la que, por exigencias de la unidad matrimonial, existe una potestad de dirección que la naturaleza, la Religión y la Historia atribuyen al marido". La reforma también supuso que, en casos de separación, aunque el marido conservaba la administración de los gananciales, devolvía a la mujer la administración de los bienes parafernales que le hubiera entregado, aunque requería autorización judicial para enajenarlos.

La reforma de 1958 se hizo posible por el esfuerzo de una mujer, Mercedes Formica, abogada madrileña y miembro de la dirección de Falange, a raíz de un suceso ocurrido en Madrid en el que el marido apuñala a su mujer, después de años de malos tratos, sin poder separarse del marido porque si lo hacía perdía su casa, sus hijos o hijas y sus bienes. Tras este hecho, Mercedes Formica escribió un artículo en ABC, denominado "El domicilio conyugal," en el que reclamaba la reforma de una ley que consideraba injusta, arbitraria y discriminatoria. La vivienda familiar era considerada como la casa del marido, de ahí que cuando una mujer intentaba separarse, ya fuera considerada

culpable o inocente, debía abandonar el hogar conyugal para ser "depositada" en otro domicilio, normalmente en el de los padres, en el de algún familiar o en un convento. Como el administrador de los bienes gananciales era el marido, ella quedaba privada de recursos económicos y, en muchas ocasiones, sin la custodia de sus hijos o hijas. Contra esta situación, reaccionó Mercedes Formica reclamando el hogar compartido, pero tardó cinco años en conseguir su objetivo. Su activa participación en la reforma del 58 y el escaso contenido de la misma, hizo que se conociera esta modificación como "la reformica", aludiendo tanto al apellido de su inspiradora como al carácter limitado de los avances.

El artículo 57 sigue diciendo que: "el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido", norma que otorgaba rango legal a la supuesta inferioridad de la mujer, institucionalizaba la autoridad marital y servía de caldo de cultivo para vulneraciones de derechos, de las que la más grave probablemente es la violencia de género. Ese artículo otorgaba al marido todo el poder de decisión, incluido el de fijar en exclusiva el lugar de residencia del matrimonio.

En materia de filiación, los hijos e hijas se dividían, en función de su origen, en legítimos, legitimados e ilegítimos, siendo estos, a su vez, naturales y adulterinos y estableciendo diferentes deberes de los padres y madres para cada una de las categorías y manteniendo la patria potestad prioritaria para el padre. Los hijos legítimos eran los engendrados en el matrimonio y los naturales e ilegítimos los concebidos fuera del mismo; la clasificación dependía de la posición de los padres respecto del matrimonio. El tratamiento diferente de los hijos e hijas, se justificaba en la protección de la familia, pero, en realidad, a quien se protegía era al varón, en perjuicio de los hijos o hijas y de las madres.

El artículo 321 del Código Civil fijaba la mayoría de edad en los 23 años, pero las hijas no podían abandonar el domicilio de los padres hasta los 25 años, salvo para casarse o ingresar en una orden religiosa. Se decía que la

finalidad de esta disposición era el decoro público y personal de las hijas. Esta discriminación se mantiene en vigor hasta la Ley 31/ 72 de 22 de julio.

Además, se prohibía a la viuda contraer matrimonio durante los trescientos y un días siguiente a la muerte de su marido o antes de su alumbramiento, para garantizar la seguridad de la herencia. Antes de esta reforma, la viuda que volviera a casarse perdía la patria potestad sobre sus hijos e hijas, salvo que el difunto marido le hubiera dado permiso. Aun así, la patria potestad sobre los hijos e hijas se otorga al padre y, sólo en su defecto, a la madre.

➤ **Ley 56/1961 de 22 de julio sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer**

Entre la reforma de 1958 y la de 1975, se aprobó esta disposición, por la influencia ejercida por la ONU. En la Exposición de Motivos reconocía los mismos derechos a las mujeres en esos ámbitos, aunque con algunas limitaciones legales para Fuerzas de Seguridad, Administración de justicia (hasta 1966) y marina mercante. Fue presentada por Pilar Primo de Rivera en nombre de la Sección Femenina, declarando "que no era ni por asomo una ley feminista" y que vino a proclamar eliminada la discriminación laboral por razón de sexo, con las excepciones ya expuestas, que consagró ya la igualdad de salarios, hizo desaparecer la excedencia forzosa en el trabajo por razón de matrimonio y aunque mantenía la autorización previa del marido, el permiso se presumía concedido en el caso de que la mujer ya trabajase antes de contraerlo. Las limitaciones para el acceso a la Administración de Justicia fueron eliminadas por la ley 96/ 1966 de 28 de diciembre.

➤ **Aprobación de la Ley General de Educación en 1970**

Ésta proclamaba la igualdad de ambos sexos en el sistema escolar e impuso la escolarización obligatoria de toda la población española hasta los 14 años, medida que posibilitó el acceso universal de las niñas a la educación.

➤ **Adhesión en 1974 al Convenio de la ONU sobre derechos políticos de la mujer de 1952**

El Convenio implicaba el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones y a ser elegidas en condiciones de igualdad respecto de los hombres, así como el derecho a ocupar cargos públicos y todas las funciones públicas. España se adhirió pero con una reserva que decía "sin perjuicio de la legalidad vigente", lo cual la vaciaba de contenido.

➤ **Ley 14/1975, de 2 de mayo sobre reforma de determinados artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y derechos y deberes de los cónyuges**

La reforma del Código Civil de 1975 fue conocida como "de la mayoría de edad de la mujer casada", pues ya la Exposición de Motivos declaraba "la eliminación de la fórmula discriminatoria de la protección como atributo del marido y la obediencia como obligación de la mujer". Incluyó, además entre los deberes del matrimonio, los de "socorro mutuo" y la obligación recíproca de "respeto y protección".

En ella, al fin, desaparece la necesidad de licencia marital, que ya no necesita para adquirir a título oneroso ni lucrativo, para enajenar sus bienes ni obligarse y ya podrá disponer de sus bienes parafernales. Respecto de los dotales, se cambia la autorización por consentimiento del marido. Sin embargo, en el caso de la mujer casada, los bienes adquiridos bajo el régimen de la sociedad de gananciales seguirán siendo administrados por el marido y éste tenía aún la capacidad de comprometer con deudas el patrimonio ganancial.

La reforma del 75 lo es de determinados artículos del Código Civil y también del Código de Comercio, suprimiéndose la licencia marital también para el ejercicio de actividades mercantiles o comerciales. Se reconoce, al fin,

que el matrimonio no tiene carácter restrictivo respecto de la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges, por lo que ninguno de ellos ostenta la representación legal del otro, aunque aún se mantienen limitaciones, por ejemplo, se establece que el domicilio se fija de común acuerdo por ambos cónyuges, pero, en el caso de que éste no se diera, la decisión le sigue correspondiendo al cónyuge que ejerciese la patria potestad (que suele ser el hombre). La mujer conserva la nacionalidad en caso de matrimonio y los cónyuges pueden hacer capitulaciones matrimoniales después de celebrado el mismo, esto es, pactos específicos sobre el régimen económico del matrimonio.

En el aspecto patrimonial se mantiene que la administración de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, es del marido, aunque se amplían los supuestos en los que puede ser realizada por la mujer, pero siempre en caso de incapacidad de aquel; cada uno de los cónyuges pasará ya a tener la administración y disposición de sus bienes privativos. Quedan todavía muchas limitaciones, que son puestas de relieve en la propia aprobación de esta reforma, en la que se dice que "se echan de menos otras modificaciones consecuentes y relacionadas con las ahora dictaminadas".

En el Derecho administrativo español, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 27 de diciembre de 1956, decía que: "Tendrán capacidad procesal ante la jurisdicción contencioso administrativa, además de las personas que la ostenten con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil, las mujeres casadas y los menores de edad en defensa de aquellos de sus derechos cuyo ejercicio esté permitido por el ordenamiento jurídico administrativo sin la asistencia del marido o persona que ejerza la patria potestad o tutela respectivamente y lo mismo dice la ley de procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958, pudiendo acceder, en las mismas condiciones que los hombres a la función pública, con las excepciones de la carrera judicial y militar de acuerdo con la ley de los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, a la que se ha hecho referencia.

En otros ámbitos como el laboral, las reformas ocurridas se estudiarán en la Unidad 4 y para el penal en la Unidad 5.

1.2. LA IGUALDAD Y LA EVOLUCION DEL DERECHO CIVIL EN ESPAÑA A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1978

1.2.1. DERECHO CIVIL EN GENERAL: REFORMAS PARA ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA, NACIONALIDAD Y ADOPCION Y PRIMERAS REFORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA

Ya por Ley de 22 de julio de 1978, se había fijado la mayoría de edad en los 18 años.

A partir de la aprobación de la Constitución española de 1978 y lo que supone en materia de igualdad (materia analizada en el Módulo 2), se produjo toda una revolución del ordenamiento jurídico para ajustarlo a la misma.

Puede mencionarse (como hizo Amparo Rubiales) que en la ponencia de elaboración de la Constitución no participó ninguna mujer, por lo que puede decirse que tuvo siete ponentes constitucionales conocidos como "padres de la Constitución", pero ninguna madre. Aunque en el debate constitucional, sí participaron algunas.

En materia de Derecho de Familia, la clave viene marcada por el artículo 32 de la Constitución, en sus dos párrafos:

- 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.*
- 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.*

Este artículo implicaba que tal igualdad de derechos debía producirse tanto en el momento de contraer el matrimonio, como durante su duración o en su extinción.

Por su parte, el artículo 39 establece:

- 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.*
- 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.*
- 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.*
- 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos*

Dentro de la actividad legislativa dirigida a adaptar el ordenamiento al principio de igualdad constitucional, pueden destacarse estas reformas:

- **En el ámbito del derecho de familia, la ley 11/1981 de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio**

Significó, al fin, el reconocimiento de la igualdad de la mujer casada, tanto en la administración y disposición de los bienes gananciales, que pasan a ser comunes para el marido y la mujer, como en el ejercicio de la patria potestad de los hijos e hijas, compartida por ambos. Se suprime la figura de la dote. Se introduce una nueva regulación de la filiación, estableciendo las mismas consecuencias para los hijos e hijas habidos o no dentro del matrimonio. Se regula la posibilidad de que el hijo o hija al llegar a la mayoría

de edad, fijada en la Constitución en los 18 años, pueda cambiar el orden de sus apellidos. Esta reforma también permite que los cónyuges fijen conjuntamente el domicilio y, a falta de acuerdo, decidirá el juzgado buscando el interés de la familia (y no ya el varón, como en la redacción anterior).

Además, en materia de Sucesiones, derogó algunos artículos que implicaban discriminaciones hacia las mujeres e hizo que, en herencias intestadas, el orden de suceder sea primero de hijos o hijas/descendientes; en su defecto, ascendientes y en su defecto, el cónyuge, para continuar con otros familiares. Antes de esta reforma, en cambio, heredaban los hermanos/as del difunto/a por delante del cónyuge.

➤ **También en familia, la Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio**

Modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y determinó el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. La regulación del divorcio en ese momento generó una gran polémica, pues algunas voces lo consideraron insuficiente, y otras, excesivo.

Estableció estos derechos y deberes en el matrimonio, habiendo quedado hoy en día ya modificada esta redacción, como se expondrá un epígrafe posterior:

Artículo 66.

El marido y la mujer son iguales en derechos y deberes.

Artículo 67.

El marido y la mujer deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.

Artículo 68.

Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Artículo 69.

Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos.

Artículo 70.

Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.

Artículo 71.

Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida.

Además, se establece un sistema causal de separación y divorcio. Así, para la separación, las causas legales eran las siguientes según el artículo 82 (redacción que ya no está en vigor):

- 1º. El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa y vejatoria y cualquier otra violación grave y reiterada de los deberes conyugales. No podrán invocarse como causa la infidelidad conyugal si existe previa separación de hecho libremente consentida por ambos o impuesta por el que la alegue.*
- 2º. Cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos comunes o respecto de los de cualquiera de los cónyuges que convivan en el domicilio familiar.*
- 3º. La condena a privación de libertad por tiempo superior a seis años.*
- 4º. El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro cónyuge o el de la familia exijan la suspensión de la convivencia.*
- 5º. El cese libre y efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido. Se entenderá libremente prestado este consentimiento cuando un cónyuge requiriese fehacientemente al otro para prestarlo, apercibiéndole expresamente de las consecuencias de ello, y éste no mostrase su voluntad en contra por cualquier medio admitido en derecho, o pidiese la separación o las medidas provisionales*

a que se refiere el artículo 103, en el plazo de seis meses a partir del citado requerimiento.

6º. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de tres años.

7º. Cualquiera de las causas de divorcio en los términos previstos en los números 3º, 4º y 5º del artículo 86.

Y el artículo 86 establecía (en una redacción que tampoco está ya en vigor) como causas de divorcio las siguientes:

1º. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o pro uno de ellos con el consentimiento del otro, cuando aquélla se hubiera interpuesto una vez transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

2º. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación personal, a petición del demandante o de quien hubiera formulado reconvencción conforme a lo establecido en el artículo 82, una vez firma la resolución estimatoria de la demanda de separación, o si transcurrido el expresado plazo, no hubiera recaído resolución en la primera instancia.

3º. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos:

a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges, a petición de cualquiera de ellos.

b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en causa de separación.

4º. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges.

5º. La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes.

Dado que, al plantear la separación o el divorcio, era muy habitual que la mujer careciera de medios económicos de vida, por haberse dedicado a la atención doméstica y de la familia, esta regulación incluyó el mecanismo de la pensión compensatoria en el art.97, para aquel cónyuge en cualquier régimen económico matrimonial que, con la ruptura, sufriera un *"empeoramiento en su situación anterior al matrimonio"*, consistente en una pensión que tendría en cuenta estas circunstancias:

- 1º. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
- 2º. La edad y estado de salud.
- 3º. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
- 4º. La dedicación pasada y futura a la familia.
- 5º. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
- 6º. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
- 7º. La pérdida eventual de un derecho a pensión.
- 8º. El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Esta Ley también establecía unos efectos asociados a la presentación de demanda, como la posibilidad de vivir separados y el cese de la presunción de convivencia y la revocación de poderes recíprocos y de vincular los bienes del otro en el ejercicio de la potestad doméstica, así como diversas medidas en relación con los hijos e hijas (arts. 102 y 103). Sin embargo, persistían desigualdades por la escasez de medidas cautelares en relación con la administración del patrimonio ganancial hasta sentencia.

➤ **Ley 51/1982, de 13 de julio, de modificación de los artículos 13 a 26 del Código Civil**

Eliminó toda discriminación en materia de nacionalidad referida a los hijos e hijas. Ampliaba las causas de posesión de nacionalidad de origen (ej: hijas e hijos de padre o madre con nacionalidad española; hijos e hijas nacidos en España de progenitores extranjeros, si al menos uno de ellos había nacido en España o si la legislación de ellos atribuía al descendiente una nacionalidad o hijos e hijas nacidos en España y de filiación desconocida).

Más adelante, se han seguido aprobando leyes en materia de nacionalidad para seguir eliminado residuos de discriminación por razón de sexo.

➤ **Ley 21/1987, de 11 de noviembre por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción**

Se modifica también el art.9 (norma de Derecho Internacional Privado) para eliminar discriminaciones hacia la mujer.

➤ **Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo**

Esta reforma, según planteaba su Exposición de Motivo, pretendía revisar el Código Civil en aquellos puntos que vulneraban el principio de igualdad por establecer a la hora de regular la eficacia de ciertas relaciones jurídicas criterios que otorgaban preferencia al varón o trato inadecuado a un sexo. Algunas de las modificaciones de esta ley tenían que ver con:

- Determinar el Derecho aplicable a los efectos del matrimonio (art.9.2).
- La validez de capitulaciones matrimoniales (art. 9.3).
- Los casos de validez de la adopción según la ley aplicable (art.9.5).

- La posibilidad de fijar alimentos para los hijos e hijas mayores de edad (art.93.3) en casos de ruptura.
- Supresión de la unidad de dirección que permitía al varón fijar la vecindad civil o nacionalidad del grupo familiar (arts. 14, 16, 1066 y 1267).
- Modificación de los términos "honra", "mujer" y "esposa" de algunos artículos (arts.648.1 y 648.2, 754 y 1924.2.b), que fueron sustituidos por los de "honor" y "cónyuge".

➤ **Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad**

Instaura el principio de autonomía de la voluntad en la adquisición de nacionalidad.

➤ **Ley 29/1995, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Código Civil en materia de recuperación de nacionalidad**

Quería reducir el trámite de dispensa para la adquisición de nacionalidad y quería eliminar algunas discriminaciones para las mujeres casadas (pues antes no podían transmitir ni el derecho de elegir a sus hijos e hijas). Así, se establece que las mujeres casadas ostentarán su propia nacionalidad sin que el matrimonio ni el cambio de nacionalidad del marido supongan "ipso iure" el cambio de la suya.

Por eso, la reforma también establece que el matrimonio no supondrá un cambio automático de vecindad civil, aunque cada uno podrá optar por la del otro.

➤ **Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos**

Hasta ese momento, la regla general era que, determinando la filiación los apellidos, el orden de estos será el paterno y materno y se reconocía también la posibilidad de modificar esta situación por el hijo una vez que haya alcanzado la mayoría de edad. Esta reforma considera más justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos, en el bien entendido de que su decisión para el primer hijo habrá de valer también para los hijos futuros de igual vínculo, lo cual no impide que, ante el no ejercicio de la opción posible, deba regir lo dispuesto en la Ley.

➤ **Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad**

Esta reforma se refiere al derecho de optar por la nacionalidad de todas las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. Y también al sistema de recuperación de nacionalidad, para simplificarlo, estableciendo la posibilidad de dispensar del requisito de residencia en España y eliminado cualquier diferencia por razón de sexo o estado civil de la persona solicitante. También contempla algún supuesto especial de recuperación pensado para aquellas mujeres que en su momento hubieran perdido la nacionalidad por razón de su matrimonio.

1.2.2. DERECHO DE FAMILIA: EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES EN EL MATRIMONIO, FILIACIÓN Y APELLIDOS Y PATRIA POTESTAD; SEPARACIÓN, NULIDAD Y DIVORCIO Y SUS EFECTOS, RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL, NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO APLICABLES A LA MATERIA Y DERECHO DE SUCESIONES

➤ **Ley 11/2003, de 29 de septiembre de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros**

Mediante esta Ley, se introduce una reforma en las normas de Derecho Internacional Privado que pueden afectar a la materia matrimonial, procediendo la anterior redacción de la Ley que introdujo el divorcio, esto es, la Ley 30/1981, de 7 de julio. Así, ahora se modifican los artículos 9.2 y 107 del Código Civil.

En lo que guarda relación con la eliminación de discriminaciones hacia las mujeres, es importante esta reforma del artículo 107, sobre todo en el punto c), pues busca atender a aquellas situaciones en las que, por el juego de normas, sería aplicable un Derecho como el islámico en algunos países, que puede resultar discriminatorio para las mujeres, por tratarlas en inferioridad de derechos o contener instituciones discriminatorias, como el repudio (decisión extrajudicial de disolución del matrimonio por el marido de manera unilateral y discrecional). Por ello, se incluyó este párrafo, para evitar que fuera de aplicación en España una legislación extranjera que vulnerara nuestros derechos fundamentales:

Artículo 107

1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la Ley aplicable a su celebración.

2. La separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; a falta de nacionalidad común, por la Ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento y, en defecto de ésta, por la Ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún reside habitualmente en dicho Estado.

En todo caso, se aplicará la Ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España:

a) Si no resultara aplicable ninguna de las leyes anteriormente

mencionadas.

b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro.

c) Si las leyes indicadas en el párrafo primero de este apartado no reconocieran la separación o el divorcio o lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.



Para consultar

Ilustran la postura de nuestros tribunales en materia de exequátur de decisiones de repudio, dos Autos del Tribunal Supremo dictados con 3 meses de diferencia y por el mismo ponente (Excmo. Sr. A. Gullón Ballester) en los cuales se concede y deniega el exequátur, respectivamente, a dos repudios musulmanes de matrimonios mixtos con elemento español, solicitados por la mujer, estos son el Auto de 21 de abril de 1998 (RJ 1998/3563) y de 23 de julio de 1998 (RJ 1998/5337):

Respecto del EDJ 1998/40999 ATS Sala 1ª de 21 abril 1998, Tribunal Supremo Sala 1ª, A 21-4-1998, rec. 737/1997, Ponente: Gullón Ballesteros, Antonio, podemos hacer este resumen:

El TS acuerda otorgar el exequátur al acta dictada por la Oficina Notarial de Asuntos Notariales de El Cairo por la que se pronunció el divorcio revocable entre española y egipcio residentes en Egipto. Entiende la Sala que, a pesar de tratarse de una resolución de divorcio revocable y que vulnera el principio de igualdad entre hombre y mujer, ha de otorgarse el reconocimiento atendiendo a que es la esposa quien solicita el exequátur, unido a que ha transcurrido con creces el periodo de tiempo al que la legislación de origen sujeta el ejercicio de la facultad de revocación por el marido, quien ha contraído nuevas nupcias. A la vista de tales circunstancias, no es posible elevar la barrera del orden público en sentido internacional de forma que se convierta en infranqueable, pues debe vencer cuando quien sufre el perjuicio del desigual trato en la ley prescinde de la tutela de la que es merecedora para impedir su consolidación en nuestro orden interno y prefiere no hacer valer en el foro tal protección, sin olvidarse del transcendental dato de que la situación de desequilibrio ha desaparecido en el momento en que se solicita el exequátur de la resolución extranjera, pues el esposo ya no tiene la facultad de recuperar el estado marital.

Fuente: Matrimonio y divorcio en las relaciones hispano-marroquíes y compilación de legislación de Derecho Privado marroquí, Volumen I, CGPJ, Ministerio AAEE, 2005-2009.

[Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas \(FIIAPP\)](#)

➤ **Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio**

Supone la modificación del Código para permitir la unión de dos personas del mismo sexo con los mismos efectos, denominación y regulación que el matrimonio de dos personas de distinto sexo, algo que sólo habían legislado en igual sentido Holanda y Bélgica (aunque esta última no permitía la adopción). Otros países lo habían regulado como unión civil, algunos con iguales derechos (Suecia) y otros con alguna restricción, como la de la adopción (Dinamarca o Francia).

Desde esta reforma, el artículo 44 del Código Civil establece que los requisitos y efectos del matrimonio serán iguales tengan las dos personas el mismo o distinto sexo, excepto en la aplicación de los artículos 116 a 118 (presunciones de la paternidad del cónyuge por nacimiento dentro de x días después del matrimonio), pues solo pueden referirse a matrimonios heterosexuales.

Mediante la reforma, se modifica en muchos artículos la terminología del Código Civil para sustituir la denominación "padre" y "madre" por la de "progenitores". Después, para adaptar las normas del Registro Civil a la reforma del matrimonio por la Ley 13/2005, se han publicado algunas disposiciones. Así, la *Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modificación de modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia*. En su preámbulo se señala que, como la referida Ley permite el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo, con eficacia en todos los ámbitos, incluyendo los que se derivan del matrimonio en el ámbito

del Registro Civil, se ha de proceder a la imprescindible adaptación terminológica en éste. Así, se sustituyen términos como "marido" y "mujer" por los de "cónyuge A" y "cónyuge B".

Con posterioridad a esa ley, se han suscitado algunas dificultades. Primero, por Jueces encargados del Registro Civil que se han negado a aplicarla e instaron cuestiones de inconstitucionalidad que fueron inadmitidas por el Tribunal Constitucional. Segundo, por la celebración de matrimonio del mismo sexo siendo uno de ellos de una nacionalidad extranjera cuya legislación no admitiera dicho matrimonio. Esto dio lugar a que se dictara por la Dirección General de los Registros y del Notariado, la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Tercer problema, la denegación de la filiación materna de la pareja femenina de la madre del hijo o hija. Se dictó la Resolución de la DGRN de 30 de septiembre de 2004 en sentido negativo, por alegar que el principio de verdad biológica impedía la inscripción de una segunda madre. Esto se ha resuelto en ley 3/2007 (que más adelante se explicará) que sí lo contempla, pues establece para casos de filiación de menores nacidos por técnicas de reproducción asistida, que si una mujeres está casada con otra mujer y no separada legalmente ni de hecho, pueda declarar ante el Encargado/a del Registro que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido.

Y en último lugar, también ha causado dificultades la inscripción de gestación de sustitución, esto es, la que se produce a través de lo que se denomina "vientre de alquiler". Esta ha motivado que se dictara la *Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución*. Esta Instrucción pretende conjugar tres aspectos: en primer lugar, garantizar los instrumentos necesarios para que la filiación tengan acceso al Registro Civil español cuando uno de los progenitores sea de nacionalidad española (exigiendo una resolución judicial extranjera), como vía de reconocimiento a efectos registrales de su nacimiento; en segundo lugar, la

inscripción registral en ningún caso puede permitir que con la misma se dote de apariencia de legalidad supuestos de tráfico internacional de menores y; en tercer lugar, la exigencia de que no se haya vulnerado el derecho del menor a conocer su origen biológico.

La Ley 13/2005 ha generado polémica e incluso la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por posible vulneración del artículo 32 de la Constitución. Así, mientras que los partidarios de la medida estiman que la verdadera igualdad solo se consigue si se equiparan todas las parejas en una misma figura jurídica, el matrimonio, sus oponentes opinan que el término "matrimonio" debería reservarse a la unión de un hombre y una mujer, ya que el artículo 32 de la Constitución habla de "hombre" y "mujer". El recurso ha sido recientemente resuelto.



Para consultar

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 6 de noviembre de 2012, recurso de inconstitucionalidad 6864/2005 ha resuelto la cuestión. Cuenta con los votos particulares del Exmo. Sr. D. Ramón Rodríguez Arribas, Exmo. Sr. D. Manuel Aragón, Exmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara y Exmo. Sr. D. Juan José González Rivas.

Se desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido en relación con la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el 44 del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. El motivo fundamental de inconstitucionalidad aducido es la infracción del art 32.1 CE, que reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y, que se ha venido configurando desde una doble dimensión conceptual, como garantía institucional y como derecho fundamental. Se razona el ajuste constitucional de la citada reforma en base a esa doble vertiente, en tanto que el matrimonio homosexual mantiene perfectamente reconocible la institución matrimonial, adaptándola al contexto sociocultural actual y, no afecta al contenido esencial del derecho, en tanto que, ni lo transforma, ni impide su ejercicio a las parejas heterosexuales.

De los ocho motivos de inconstitucionalidad invocados para sustentar la pretensión, el fundamental y que sería el que por sí mismo podría llegar a fundamentar la estimación del recurso, es el relativo a la infracción del art 32 CE que reconoce el derecho a contraer matrimonio.

Se desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido, en tanto que no se ha producido un menoscabo inadmisibles a la garantía constitucional del matrimonio, ni se ha reducido o limitado el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio.

La institución matrimonial que configura la ley impugnada no supone una desnaturalización de la misma desde la perspectiva de garantía institucional, que la haga irreconocible, sino que el hecho de que los contrayentes puedan ser del mismo sexo, supone una integración de la misma en la evolución propia del contexto socio-cultural actual que no puede ser ignorado. Por tanto, no supone un ataque susceptible de reproche constitucional, limitándose a generalizar el régimen matrimonial a cualquier persona con independencia de su orientación sexual.

A la misma conclusión se llega desde su conceptualización como derecho fundamental, la cual permanece intacta, en tanto que se trata de una modificación de unas de las condiciones de ejercicio y no una limitación del mismo, en modo alguno afecta a su contenido ni reduce la esfera de libertad en el ejercicio del derecho a contraer matrimonio que ostentaban las parejas heterosexuales.

Asimismo, se alegan como motivos de inconstitucionalidad: la infracción del art 10.2 CE; la infracción del art 14 CE, en relación con los art 1.1 y 9.2 CE; la infracción del art 39 CE en sus apartados 1,2,4; la infracción del art 53.1CE, en relación al 32 CE; la infracción del art 9.3 CE, desde el principio de jerarquía normativa y desde el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y, la infracción del art 167 CE. Tales motivos no se consideran autónomos, no considerándose vulnerados por no serlo el art 32 CE.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

Esta Ley ha conservado los derechos y deberes del matrimonio que ya recogía el Código Civil, añadiéndoles el de "compartir las responsabilidades

domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo".

➤ **La ley 15/2005, de 8 de julio por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio**

Elimina las causas de separación y divorcio previstas en su día por la Ley de 1981 para separación y divorcio, al entender que la mera voluntad de cesar en el vínculo del matrimonio es suficiente para demandar separación o divorcio, evitando tener que exponer ante terceros las desavenencias surgidas. Ello ha supuesto la eliminación del concepto de "culpabilidad" en estas situaciones.

Además, esta Ley modifica el artículo 68, que regula deberes y derechos de los cónyuges, pasando por primera vez a incluir el deber de compartir el cuidado y atención de hijos e hijas y demás personas dependientes:

"Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo».

Esta regulación sigue manteniendo la separación judicial como una figura autónoma. Sin embargo, se permite que cualquiera de los cónyuges pueda pedir unilateralmente el divorcio en cuanto hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio (excepto si existe riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, supuesto en que puede pedirse al día siguiente a la celebración del matrimonio).

Se introduce la posibilidad de suspender el proceso para que las partes acudan a mediación familiar. Además, esta reforma regula por primera vez la

posibilidad de otorgar la denominada "custodia compartida" a los progenitores que no convivan. Así, el artículo 92 queda redactado de esta manera:

«Artículo 92.

- 1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos.*
- 2. El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.*
- 3. En la sentencia se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello.*
- 4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el Juez podrá decidir, en beneficio de los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por unos de los cónyuges.*
- 5. Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. El Juez, al acordar la guarda conjunta y tras fundamentar su resolución, adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando no separar a los hermanos.*
- 6. En todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.*
- 7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.*

8. Excepcionalmente, aún cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.

9. El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores».

Debe resaltarse que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2012, Sala 3, recurso 8912/2006. Ponente: Roca Trías, Encarnación., declara nulo el inciso "favorable" del artículo 92.8 citado, estimando cuestión de constitucionalidad planteada al respecto. Para el Alto Tribunal, esta previsión normativa, introducida por la Ley 15/2005, de 8 de julio, es contraria a lo dispuesto en el art. 117.3 CE, pues corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal verificar si concurren los requisitos legales para aplicar el régimen excepcional y, en el caso de que así sea, valorar si, en el marco de la controversia existente entre los progenitores, debe o no adoptarse tal medida. Aunque la actuación del Ministerio Público está prevista para asegurar el bienestar de los hijos o hijas menores, que el pronunciamiento judicial dependa de dicho dictamen menoscaba de facto el derecho a obtener una resolución sobre el fondo.



Para consultar

La Sentencia 185/2012, de 17 de octubre de 2012, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional por la cuestión de inconstitucionalidad 8912-2006. Planteada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria en relación con el artículo 92.8 del Código civil, en la redacción dada al mismo por la Ley 15/2005, de 8 de julio. Derecho a la tutela judicial efectiva, exclusividad jurisdiccional y principio de protección a la familia: nulidad parcial del precepto legal que, en los procesos de separación y divorcio en los que no medie acuerdo entre los padres, supedita al informe favorable del Ministerio Fiscal la adopción de un régimen

de guarda y custodia compartida de los hijos menores de edad. Cuenta con Voto particular.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

También se efectúa una modificación de la regulación de la pensión compensatoria en estos términos:

«Artículo 97.

El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1ª. Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.

2ª. La edad y el estado de salud.

3ª. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

4ª. La dedicación pasada y futura a la familia.

5ª. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

6ª. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

7ª. La pérdida eventual de un derecho de pensión

8ª. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

9ª. Cualquier otra circunstancia relevante.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.

Otra reforma que realiza esta Ley consiste en armonizar los derechos del cónyuge viudo/a en la sucesión. Antes de la reforma, el cónyuge viudo culpable de la separación judicial (concepto que ya resultaba desfasado) se

veía privado de sus derechos de legítima (es decir, de la protección legal de recibir al menos el usufructo del tercio de mejora), pero no de los derechos a la herencia intestada. Ahora, con la reforma, para poder tener derechos a la herencia de su cónyuge fallecido será necesario no estar separado judicialmente ni de hecho del difunto, sin mención alguna ya (carente de sentido) a la culpabilidad o inocencia en la separación. Esa redacción puede dejar aún problemas debido a la dificultad de acreditar cuándo ha existido una separación de hecho, sobre todo en situaciones en que haya habido una reconciliación de los cónyuges tras una sentencia de separación, pero no haya sido comunicada al Juzgado.

Para realizar esta armonización, reforma los artículos 834, 835, 837, 840 y 945 del Código Civil:

Artículo 834.

El cónyuge que al morir su consorte no se hallase separado de éste judicialmente o de hecho, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho al usufructo del tercio destinado a mejora.

Artículo 835.

Si entre los cónyuges separados hubiera mediado reconciliación notificada al Juzgado que conoció de la separación de conformidad con el artículo 84 de este Código, el sobreviviente conservará sus derechos.

Artículo 837.

No existiendo descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho al usufructo de la mitad de la herencia.

Artículo 840.

Cuando el cónyuge viudo concorra con hijos sólo del causante, podrá exigir que su derecho de usufructo le sea satisfecho, a elección de los hijos, asignándole un capital en dinero o un lote de bienes hereditarios.

Artículo 945.

No tendrá lugar el llamamiento a que se refiere el artículo anterior si el cónyuge estuviere separado judicialmente o de hecho.

En materia de Derecho de Familia, debe hacerse mención a la existencia de alguna normativa comunitaria de especial incidencia. La situación comienza a cambiar a partir del año 2000 fecha en la que, como consecuencia de la comunitarización del Derecho internacional privado, se promulga el primer reglamento de familia el **Reglamento (CE) 1347/2000**. La tendencia continuó con la sustitución de dicho Reglamento por el **actualmente vigente 2201/2003** que, con miras más amplias, se ocupaba de la competencia y reconocimiento en materia de crisis matrimoniales y de la responsabilidad parental sobre todos los hijos.

También es de aplicación el **Reglamento 1259/2010** (ley aplicable al divorcio). Además, el día 1 de enero de 2011 entró en vigor para España, finalmente, el **Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996** (BOE núm. 291 de 2 de diciembre de 2010), del que son Estados parte: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mónaco, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania y Uruguay. En España este Convenio sólo se aplicará a las materias y a las situaciones que no estén cubiertas por el Reglamento (CE) 2201/2003.

Se trata de un Convenio de Derecho internacional privado completo, es decir, se ocupa de la competencia, ley aplicable, reconocimiento de resoluciones y cooperación de autoridades y supone la actualización del Convenio de la Haya de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores.

Por último, en materia de alimentos, el día 10 de enero de 2009 se publicó en el DOUE el **Reglamento núm. 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos**, que sería de aplicación a partir del 18 de junio de 2011, siempre y cuando el Protocolo de la Haya, de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias fuese aplicable en la Comunidad ese día. Superada esa fecha y, a pesar de que el Protocolo no ha entrado en vigor puesto que sólo tiene una ratificación (la de la UE), la Unión ha indicado que se va a aplicar provisionalmente (Decisión del Consejo de 30 de noviembre de 2009), por lo que el nuevo Reglamento ya está en vigor. Se trata de un instrumento completo que sustituye en la materia alimenticia al **Reglamento 44/2001** y, parcialmente, al **Reglamento 805/2004**, prevalece en España sobre los Convenios de La Haya de 1973 (ley aplicable y reconocimiento) y se ocupa de las obligaciones alimenticias derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad.



Para consultar

REGLAMENTO (CE) N°2201/2003 DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n°1347/2000.

Fuente: [Eurolex](#)

REGLAMENTO (UE) N°1259/2010 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. (Aplicable a demandas y convenios interpuestos a partir del 21 de junio de 2012).

Fuente: [Eurolex](#)

Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de

medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

Reglamento núm. 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Fuente: [Eurolex](#)

➤ **Regulación actual del régimen económico matrimonial**

El régimen económico matrimonial es aquel por el que se establecen las normas a través de las cuales se regulan las relaciones económicas entre los cónyuges, así como entre éstos y terceras personas. La actual regulación del régimen económico matrimonial se establece en el artículo 1315 y siguientes del Código Civil: los cónyuges podrán pactar, antes o durante el matrimonio, el régimen que deseen y, en territorio común, a falta de pacto, regirá la sociedad de gananciales. O si han pactado excluir gananciales pero sin elegir otro, entonces regirá el de separación de bienes. Además, el Código Civil contempla otro posible régimen, el de participación en ganancias. El Código Civil establece para todos ellos unas normas obligatorias que se inspiran en la igualdad jurídica entre los cónyuges.

Los artículos 1325 a 1335 regulan las capitulaciones matrimoniales basadas en el principio de libertad de pactos, aunque siempre con el límite del respeto al principio de igualdad de derechos de cada cónyuge (art.1328).

En cualquier caso, existirán unos gastos asociados al mantenimiento de la familia a los que deben hacer frente los cónyuges con los bienes e ingresos del matrimonio y los suyos propios, como alimentación de la familia, pago de la hipoteca o alquiler, gastos de vestido, gastos sanitarios de los cónyuges e hijos o hijas, gastos de formación de los hijos e hijas, gastos de los hijos o hijas de uno solo de los cónyuges que convivan en el hogar familiar, gastos de

mantenimiento de la vivienda, etc. Ambos cónyuges deben contribuir a ellos, aunque el Código Civil no fija en qué proporción. Sí establece que el cuidado y atención a los hijos e hijas y el trabajo doméstico se considerará contribución a las cargas del matrimonio.

Algunos puntos protectores de la legislación consisten en:

- Atribuir la potestad doméstica a ambos cónyuges, esto es, la posibilidad de llevar a cabo actos necesarios para el mantenimiento de la familia, en situación de igualdad y sin precisar el consentimiento del otro, sea cual sea el régimen económico.
- Atribución, para el caso de que uno de los cónyuges fallezca, de las ropas, mobiliario enseres de uso común de la casa al superviviente, sin que esto se tenga en cuenta de cara a sus derechos sobre la herencia.
- Libertad de contratación entre cónyuges, dentro de los límites marcados por la ley.
- Necesidad de que haya consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial, para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y muebles de uso ordinario de la familia, aunque pertenezcan solo a uno de ellos. Si se dispone sin esa autorización, el acto jurídico podría ser anulado.

El régimen de gananciales es aquel en que se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos durante el matrimonio por cualquiera de ellos, de manera que, al liquidarse ese régimen, corresponderán a cada cónyuge la mitad de los bienes y derechos existentes. Dentro del régimen de gananciales, coexisten dos tipos de bienes: los gananciales y los privativos de cada cónyuge.



Para consultar

Artículo 1346.

Son privativos de cada uno de los cónyuges:

1. Los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad.
2. Los que adquiriera después por título gratuito.
3. Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos.
4. Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.
5. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos.
6. El resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos.
7. Las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor.
8. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando éstos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común.

Los bienes mencionados en los apartados 4 y 8 no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes; pero, en este caso, la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho.

Artículo 1347.

Son bienes gananciales:

1. Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges.
2. Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales.
3. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.
4. Los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.
5. Las Empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la Empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1.354

En cuanto a la administración de los bienes gananciales, la regla general es la administración conjunta y, para disponer o gravar los mismos, se necesita el consentimiento de ambos, salvo en determinados supuestos (ej: base la administración de uno para gastos de carácter urgente).

En cuanto al régimen de separación de bienes, consiste en que cada cónyuge tenga la propiedad, libre disposición y administración de todos sus bienes, perteneciendo a cada cónyuge tanto los bienes que tenía antes de contraer matrimonio, como los que adquiriera con posterioridad. En este régimen, conviene destacar el artículo 1438, por su influencia en la situación de muchas mujeres, que establece: *“Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio, lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”*. Otras leyes autonómicas desarrollan este principio de forma aún más amplia detallando que ese trabajo incluye el cuidado de descendientes o personas dependientes, fija criterios como el valor de mercado de servicios semejantes, etc. (ej.: , legislación valenciana).

➤ **La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana asistida**

Esta ley pretende abordar distintos aspectos relacionados con la reproducción asistida, actualizando una antigua ley en la materia, de 1988 y que había sido reformada en 2003. Así, la Ley 14/2006 define claramente, con efectos exclusivamente circunscritos a su ámbito propio de aplicación, el concepto de preembrión, entendiendo por tal al embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. Además, en línea con lo que dispone la Constitución Europea, prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos.

Las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse también son objeto de nueva regulación. Evita hacer una lista cerrada, al enumerar las técnicas que, según el estado de la ciencia y la práctica clínica, pueden realizarse hoy día. Para evitar que quede obsoleta, habilita a la autoridad sanitaria correspondiente para autorizar, previo informe de la Comisión

Nacional de Reproducción Humana Asistida, la práctica provisional y tutelada como técnica experimental de una nueva técnica; una vez constatada su evidencia científica y clínica, el Gobierno, mediante real decreto, puede actualizar la lista de técnicas autorizadas.

Por otra parte, se ha producido una evolución notable en la utilización y aplicación de las técnicas de reproducción asistida en su vertiente de solución de los problemas de esterilidad, al extender también su ámbito de actuación al desarrollo de otras complementarias para permitir evitar, en ciertos casos, la aparición de enfermedades, en particular en las personas nacidas que carecen de tratamiento curativo. El diagnóstico genético preimplantacional abre nuevas vías en la prevención de enfermedades genéticas que en la actualidad carecen de tratamiento y a la posibilidad de seleccionar preembriones para que, en determinados casos y bajo el debido control y autorización administrativos, puedan servir de ayuda para salvar la vida del familiar enfermo. Ello también es objeto de regulación.

La Ley contempla el sistema autonómico, que hará que sean las distintas Comunidades las que autoricen proyectos concretos y refuerza el papel asesor de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por otro lado, la realidad de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en nuestro país no puede ser ajena a la consideración de que dichas técnicas se han desarrollado de manera extensiva en especial en el ámbito privado. De esa realidad se deriva que la intervención de los poderes públicos en este campo debe ir dirigida también a compensar la asimetría de información que existe entre quienes acuden a demandar la aplicación de estas técnicas y quienes las aplican, de manera que se garantice en lo posible el equilibrio de intereses entre unos y otros. Para ello, regula la información que los centros han de ofrecer a los usuarios/as. Mantiene el *Registro de donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana* y crea el *Registro de actividad de los centros de reproducción asistida*.

Por último, para corregir los problemas suscitados por la legislación precedente, la Ley elimina las diferencias en la consideración de los preembriones que se encontrasen criopreservados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y los que pudieran generarse posteriormente, en cuanto a sus destinos posibles, siempre supeditados a la voluntad de los progenitores y, en el caso de la investigación, a condiciones estrictas de autorización, seguimiento y control por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Y crea un sistema de infracciones y sanciones.

Además, esta Ley aprovecha para regular lo siguiente, en materia de filiación:

- 1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos (referidos a la determinación legal de la filiación y a la premoriencia del marido).*
- 2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la generación.*

➤ **La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas (transexualidad)**

Esta Ley se refiere a la transexualidad. Esta implica una disconformidad entre el sexo psicológico de una persona y sus demás caracteres sexuales. Así, su identidad sexual no corresponde a su condición anatómica.

De acuerdo con lo que expone su propia Exposición de Motivos, esta Ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género.

Contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.

La transexualidad, considerada como un cambio de la identidad de género, ha sido ampliamente estudiada ya por la medicina y por la psicología. Se trata de una realidad social que requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación registral del sexo y del nombre propio pueda ser modificadas, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas. De acuerdo con la regulación que se establece en esta Ley, la rectificación registral del sexo y el cambio del nombre se dirigen a constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad de género, de manera que queden garantizadas la seguridad jurídica y las exigencias del interés general. Para ello, dicho cambio de identidad habrá de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil.

Artículo 4. Requisitos para acordar la rectificación.

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado.

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual. Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.

➤ **La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil**

Esta Ley supone una nueva regulación de toda la normativa del Registro Civil. Como aspecto concreto que tiene que ver con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, vuelve a establecer una reforma legal en materia de orden de los apellidos. Así, el artículo 49 sobre "Contenido de la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos" regula:

1. En la inscripción de nacimiento constarán los datos de identidad del nacido consistentes en el nombre que se le impone y los apellidos que le correspondan según su filiación. Constarán asimismo el lugar, fecha y hora del nacimiento y el sexo del nacido.

2. La filiación determina los apellidos.

Si la filiación está determinada por ambas líneas, los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.

En caso de desacuerdo o cuando no se hayan hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores, o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos.

Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.

En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podrá determinar el orden de los apellidos.

El orden de los apellidos establecido para la primera inscripción de nacimiento determina el orden para la inscripción de los posteriores nacimientos con idéntica filiación. En esta primera inscripción, cuando así se solicite, podrán constar la preposición de y las conjunciones y o entre los apellidos, en los términos previstos en el artículo 53 de la presente Ley.

El Consejo de Ministros ha presentado en diciembre de 2012 un borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros. Si el mismo sale adelante, supondrá un gran cambio de todo el sistema registral español, pues, entre muchos otros aspectos, pretende atribuir la llevanza de todos los Registros jurídicos, entre ellos el Civil, a los registradores/as de la propiedad y mercantiles, integrados en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. También pretende pasar del soporte en papel a los Registros electrónicos y convertir al Registro Civil en un verdadero Registro de efectos jurídicos y no un mero archivo administrativo.

➤ **Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses**

Aunque esta norma es de tipo general, para imponer tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, por ejemplo asociado a la interposición de cualquier demanda en procesos civiles, así como a la interposición del recurso de apelación y el de casación, debe recogerse que la norma establece exención de tasa en el ámbito del Derecho de Familia a:

"a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los

procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores".

Dada la ambigüedad de la norma, por parte de Secretarios y Secretarías judiciales de distintos partidos judiciales, se están adoptando diversos acuerdos de interpretación de la misma, por ejemplo para entender cuándo se va a considerar que una separación o divorcio versan "exclusivamente" sobre guarda y custodia o alimentos.

Parece que, sin embargo, el texto de la norma permite concluir que las demandas de ejecución de título judicial (ej: para reclamar por el impago de pensiones alimenticias) no están sujetas a tasa, mientras que la oposición a cualquier ejecución sí lo estará. Desde el punto de vista subjetivo, estarán exentas del pago de tasa las personas beneficiarias de justicia gratuita.



Para consultar

Artículo de Ángeles Álvarez, Diputada del PSOE y fundadora de la Red Estatal contra la Violencia de Género, publicado en el Huffington Post el 11 de diciembre de 2012, titulado: "Si eres mujer, ¡lo vas a pagar!"

Fuente: [Huffingtonpost](#)

Para consultar un compendio de criterios judiciales sobre las tasas, puede consultarse esta página: [Abogae](#)

Dicha norma ha sufrido una reciente reforma mediante la aprobación del *Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita*. En lo que puede afectar a Derecho de Familia, la modificación prevé:

Tres. Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 4, al que también se añaden tres nuevas letras:

«a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.»

(...) i) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.»

1.2.3. LA EFICACIA HORIZONTAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O EL LLAMADO "DRITTWIRKUNG" EN MATERIA DE DERECHO PRIVADO

Resulta debatida la incidencia de los derechos fundamentales en el Derecho privado y, más concretamente, si su titular está protegido únicamente frente a la injerencias del poder político (relación de subordinación), o también frente a vulneraciones -naturalmente, no constitutivas de ilícito penal- por parte de otros titulares de derechos fundamentales (relación de coordinación). Es lo que la terminología alemana llama "Drittwirkung der Grundrechte" o eficacia horizontal de los derechos fundamentales.

Un ejemplo de situación en la que cabe estudiar si esos derechos fundamentales han de ser respetados o no sería el caso de una persona a la que se deniega la entrada en un local por razón de su homosexualidad o de su color de piel. Normalmente, el dueño o dueña del establecimiento alegará la "privatización" del espacio o la "reserva del derecho de admisión" para

justificar la negativa y conculcar así el principio de no discriminación por razón de sexo o nacionalidad del art. 14 CE, que proclama la igualdad de todas las personas.

Frente a una posición contraria a la virtualidad de los derechos fundamentales en el tráfico jurídico privado, existe otra favorable en la que algunos se inclinan por la horizontalidad directa sin necesidad de mediar ninguna norma interpuesta. Otra parte de la doctrina considera que los derechos fundamentales informan el concreto contenido de las cláusulas y conceptos generales del Derecho Privado, como la buena fe, moral, buenas costumbres u orden público (arts. 7.1, 1255 y 1258 C.c.), conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que le permiten adaptarse adecuadamente a los continuos cambios de nuestra frenética sociedad.

En general, se acepta una cierta operatividad de los derechos fundamentales en el ámbito privado, si bien la aplicación de los derechos fundamentales entre los particulares es más matizada, dado la prevalencia en él del principio de autonomía de la voluntad y libertad negocial, que en la esfera de lo público.

Cierto es que el art. 53 CE establece: "los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos", olvidándose, como puede verse, de la ciudadanía, a los que sí contempla, en cambio, en su art. 9.1. Sin embargo, a pesar de la omisión, nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia 177/1988, de 10 de octubre, considera:

"ciertamente, el art. 53.1 del Texto constitucional tan sólo establece de manera expresa que los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos, pero ello no implica una exclusión absoluta de otros posibles destinatarios, dado que, como señala la STC 18/1984 (RTC 1984\18) (fundamento jurídico 6º) «en un Estado social de Derecho no puede sostenerse con carácter general que el titular de tales derechos no lo sea en la vida social».

De aquí que este Tribunal haya reconocido que los actos privados puedan lesionar los derechos fundamentales y que en estos supuestos los interesados pueden acceder a la vía de amparo si no obtienen la debida protección de los Jueces y Tribunales a los que el ordenamiento encomienda la tutela general de los mismos. Las relaciones entre particulares, si bien con ciertas matizaciones, no quedan, pues, excluidas del ámbito de aplicación del principio de igualdad, y la autonomía de las partes ha de respetar tanto el principio constitucional de no discriminación como aquellas reglas, de rango constitucional u ordinario, de las que se derive la necesidad de igualdad de trato. No cabe olvidar que el art. 1.1 C. E. propugna entre los valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, y que el 9.2 encomienda a todos los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas".

Así las cosas, la buena fe es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Es evidente que los derechos fundamentales no operan, por igual, en cualquier relación privada, de ahí que la *Drittwirkung* sólo puede encontrar una solución puramente casuística, haciendo un juicio de razonabilidad en cada caso.

**Para consultar**

El caso de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, en el que se producía una colisión entre el principio de igualdad y el derecho de asociación y el Tribunal Supremo dio prioridad al de igualdad:

Cinco mujeres, hijas de pescadores, solicitaron el ingreso en la Comunidad de Pescadores de El Palmar en las mismas condiciones que los hijos de pescadores y se les denegó.

Interpuesta demanda ante Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Valencia, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, por vulnerar el derecho de igualdad, ésta fue estimada.

Recurrida en apelación por la Comunidad de Pescadores, la AP de Valencia, en su Sentencia de 24 de abril de 1999, desestimó el recurso, confirmando la sentencia de instancia:

“El sexto y último motivo del recurso en el que se pretende amparar la demanda es en el derecho de asociación en su vertiente negativa, de no asociarse, en cuanto que como Comunidad de Pescadores no puede serle impuesta la admisión de ningún socio y en punto a ello cabe decir que es jurisprudencia constitucional (Sentencia del Tribunal Constitucional 218/1988, de 22 de noviembre y auto 2/1993 de 11 de enero), la que declara que el derecho de asociación reconocido en el artículo 22.1 de la Constitución, en su contenido esencial comprende tanto el derecho a asociarse como el de establecer la propia organización del ente creado por el acto asociativo, de ahí que si bien los tribunales deben respetar el derecho fundamental de autoorganización de las asociaciones, al ser esta faceta de dotarse de su propia normativa, uno de los aspectos de dicho derecho fundamental de asociación, no lo es menos que tal facultad no significa que dentro de la asociaciones existan zonas que hayan de quedar exentas de control judicial, puesto que es ese derecho, en cualquier caso, el que se ha de ejercitar dentro del marco de la Constitución, lo que quiere decir que aunque las normas aplicables por el Juez, habrán de ser en primer término las contenidas en los estatutos de la asociación, ello lo será siempre que no fuesen contrarias a la Constitución y a la Ley, por lo que, en consecuencia, no se podrá so pretexto del

derecho de autorregulación de la asociación, permitir que coexistan situaciones que vayan contra la norma constitucional y en concreto contra el derecho fundamental del artículo 14 que consagra el principio de igualdad de las personas y de la no discriminación por razón de sexo, procediendo, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia" (FJ 5º).

Interpuesto recurso de casación por la Comunidad de Pescadores, fundado, entre otros motivos, en la infracción por inaplicación del derecho fundamental de asociación reconocido y amparado en el art. 22 CE, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 8 de febrero de 2001¹³, declaró no haber lugar al mismo al considerar que el factor sexo había sido el elemento determinante de la discriminación laboral a que habían sido sometidas las cinco actoras.

Fuente de todo el epígrafe: artículo sobre *La horizontalidad de los derechos fundamentales*, de la profesora de la Universidad de Sevilla Inmaculada Sánchez Tesón: [La horizontalidad de los derechos fundamentales](#)



Para consultar

Sentencia constitucional sobre igualdad en materia de Derecho de Familia:

La STC 144/2003, de 14 de julio donde una vez eliminada la preferencia de la madre en materia de custodia de menor de 7 años (se eliminó en la Ley 11/1990 de 15 de octubre por entender que era discriminatorio), un padre recurrió por atribución a la madre solo basada en edad del hijo, pues el tribunal había aplicado la norma derogada. El padre solicitaba amparo alegando haber sufrido una discriminación por razón de sexo y una vulneración de la tutela judicial efectiva. Y el Tribunal otorga el amparo y ordena se retrotraigan las actuaciones con el fin de poder dictar nueva decisión sobre custodia basada en argumentos y prueba que demuestren cuál es el progenitor más idóneo para ejercer la custodia.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

2. LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL FENÓMENO DE LA EXTRANJERÍA

En nuestra agenda se deben establecer metas para lograr que los recursos sean para todas, tanto, como los derechos a la libertad de tránsito, de trabajo, de pensamiento. No podemos conformarnos que sólo sean para unas cuantas. El derecho a decidir algunas cosas del que gozamos algunas, debe ser el principio político a generalizar porque centenas de millones de mujeres no pueden decidir ni elegir.

(Marcela Lagarde, 2006).

Para poner en práctica...



¿Crees que el proceso migratorio afecta por igual a hombres que a mujeres?



¿Crees que las leyes de extranjería tienen una perspectiva de género? ¿En qué aspectos crees que podría percibirse?

2.1. PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE EL FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN

El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas realiza desde 1978 un reporte anual, "El Estado de la Población Mundial", focalizando temas de interés contemporáneos. En el mes de septiembre de 2006 presentó su último informe titulado "Hacia la esperanza: Las mujeres y la migración internacional" y en 2009 "Frente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y el clima". En ellos, se exhorta a los gobernantes mundiales a realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los derechos humanos de las mujeres migrantes, así como a cuidar la perspectiva de género en la lucha contra el cambio climático y el efecto invernadero.

Las mujeres migrantes toman la decisión de trasladarse o se ven forzadas por diversas razones. En algunas, para poder contraer matrimonio, en muchos casos poder reunirse con sus esposos y/o las familias que han migrado antes que ellas, o solamente para poder trabajar. Las tareas que cumplen cubren un amplio abanico de profesiones (maestras, enfermeras) y de trabajo comunitario; ellas son trabajadoras domésticas, mucamas, cuidadoras de personas enfermas; muchas otras se desempeñan como agricultoras, camareras, trabajadoras en fábricas donde se las explota; otras terminan trabajando como artistas del entretenimiento, recepcionistas o incluso pueden caer en manos de redes de prostitución.

La migración puede ser para ellas una experiencia que las empodera, ya que les brinda independencia económica y nuevas experiencias. Al mismo tiempo, al migrar enfrentan más peligros que los hombres y son más vulnerables a abusos físicos, sexuales y verbales. Cuando llegan al país receptor, a veces experimentan una doble discriminación, en su calidad de migrantes y mujeres.

La OIM (International Organisation for Migration) responde a esta realidad con una estrategia para transversalización del género y proyectos con sensibilidad de género que se ocupan de diversos asuntos.

Según el informe anual del UNFPA, "las mujeres constituyen casi la mitad de todos los migrantes internacionales a escala mundial: 95 millones", es decir el 49,6%. Ello parece haber llevado a la comunidad internacional a tener una percepción más clara cuánto aportan las mujeres migrantes "a la economía y al bienestar social de las poblaciones que viven en los países de origen y de destino", y en algunos casos a formular ciertas políticas que reconozcan los problemas particulares y los riesgos que corren estas mujeres cuando cruzan las fronteras hacia tierras desconocidas.

UNFPA consigna que sólo en el año 2005 las remesas, es decir los fondos enviados por los y las migrantes a sus países de origen, ascendieron a

un total estimado en 232.000 millones de dólares estadounidenses. Es muy importante señalar que si bien las sumas totales que son enviadas por las mujeres son inferiores a aquellos enviados por los hombres, los estudios remarcan que "las mujeres envían una mayor proporción de sus menores ingresos a las familias que quedaron en el país de origen", y para poder hacer esto estas mujeres incluso lo hacen en detrimento de sus necesidades básicas cotidianas, como la atención de su salud, y la posibilidad de acceso a la educación.

Si bien la migración forzada conlleva riesgos para todas las personas afectadas, las mujeres y las niñas están sujetas por añadidura a otros riesgos particulares: al huir, al encontrar refugio temporal y al asentarse. En 2005, aproximadamente la mitad de los 12,7 millones de refugiados del mundo eran mujeres. En cambio, las mujeres constituyen una proporción menor de los solicitantes de asilo debido a que con frecuencia se hace caso omiso de las denuncias de persecución por motivos de género.

Cuando estallan conflictos armados, son en gran medida las mujeres y las niñas quienes absorben la carga de atender a la infancia, la población anciana y con discapacidad. Las milicias armadas suelen hacer víctimas de violación a las mujeres y las niñas. Muchas se ven obligadas a soportar embarazos no deseados, infección con el VIH y lesiones y enfermedades del aparato reproductor. Se estima que, en cualquier momento, un 25% de todas las mujeres refugiadas en edad de procrear están embarazadas. Algunos grupos de mujeres (entre ellas, jefas de hogar, excombatientes, ancianas, discapacitadas, viudas, jóvenes madres y adolescentes no acompañadas) son más vulnerables y requieren protección y apoyo especiales. Las mujeres refugiadas enfrentan riesgos concretos. Aun cuando las alojadas en campamentos suelen tener mejor acceso a servicios de salud reproductiva que la población en general, es verdad que sus voces no son oídas por igual cuando se trata de planificar emplazamientos, o adoptar medidas de consolidación de la paz y de reasentamiento. Ésta es una grave omisión que, en última instancia, menoscaba las tareas de reconstrucción".

Incluimos aquí las **principales conclusiones y recomendaciones** del informe:

1. Reforma de las políticas:

- Es preciso revisar las políticas de migración desde una perspectiva de género y derechos humanos. Las políticas que hacen caso omiso de las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres en cuanto a la experiencia de la migración, probablemente han de fracasar.
- Es necesario eliminar las disposiciones discriminatorias y velar por que las mujeres tengan iguales oportunidades de migrar en condiciones legales y de seguridad; así se podría contribuir a reducir la explotación, la migración irregular, el contrabando y la trata de seres humanos. Esto puede posibilitar que las mujeres se mantengan a sí mismas y a sus familias sin correr riesgos indebidos y puede ayudar a los países a eliminar ingentes empresas ilícitas.
- Los encargados de formular políticas pueden contribuir a proporcionar alternativas a la migración, eliminando la discriminación por motivos de género y ampliando las oportunidades de las mujeres y las niñas en los países de origen.
- Intensificar las medidas para reducir la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres también sería un factor clave para prevenir la explotación y la trata de mujeres y niñas.
- La enorme escasez de análisis de datos y de investigaciones en relación con las mujeres migrantes refleja hasta qué punto se ha hecho caso omiso de ellas. Se necesitan mayores investigaciones y análisis para mejorar las políticas y la conducción de la migración.

2. Autonomía de la mujer y violencia por motivos de género:

- Con frecuencia, las mujeres migrantes tienen condición de "familiar

a cargo". Sus visados y su permanencia en un país dependen de sus esposos, de otros parientes masculinos, o de sus empleadores. En algunos países, esa condición de estar a cargo, implica la prohibición de trabajar, con lo cual se agrava su dependencia y su vulnerabilidad. Esto a veces las obliga a buscar trabajo en sectores de explotación y no reglamentados de la economía o empleos muy por debajo de sus calificaciones ("desperdicio de cerebros") o, en muchos casos, a padecer reiterados abusos.

- La violencia de género en la pareja contra las mujeres migrantes es un grave problema. Los países de destino deberían adoptar políticas que respondan a las necesidades y los intereses de las víctimas de violencia por motivos de género y de sus hijos e hijas, y también deberían considerar la posibilidad de otorgarles condición independiente, permisos de trabajo, acceso a servicios sociales y de salud, y apoyo para recibir educación y enseñanza de oficios.
- Todas las mujeres y las niñas - sea cual fuere su condición de documentadas o indocumentadas - merecen tener acceso a los servicios y la protección. Ninguna mujer debería tener que soportar abusos debido simplemente a que su visado depende de un esposo que la maltrata o de un empleador, o porque teme ser detenida o deportada.
- La pobreza y las limitadas oportunidades impulsan a muchas mujeres a buscar en el extranjero esposos más pudientes, como se pone de manifiesto en el comercio mundial de novias. Otras son vendidas u obligadas a contraer matrimonio con extranjeros. Las políticas y las reglamentaciones deberían protegerlas contra ese atrapamiento en relaciones abusivas o en matrimonios forzados.

3. Acceso a servicios de salud reproductiva, inclusive los relativos al VIH y el SIDA:

- Las mujeres migrantes, sus familias y las sociedades de los países de destino, todos se han de beneficiar al proporcionar mayor acceso

a servicios de salud reproductiva dispensados con sensibilidad cultural. Esto podría dar a las mujeres mayor control sobre la procreación; mejorar la salud de las madres y los recién nacidos; prevenir la propagación del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y contribuir a la integración de las migrantes y a ofrecer mejores perspectivas para la próxima generación.

- Millones de mujeres trabajadoras migrantes tienen grandes necesidades insatisfechas en materia de salud reproductiva. Esta situación repercute gravemente sobre su salud en general, su bienestar y su productividad, y sobre su posibilidad de seguir contribuyendo a las economías de los países de destino.
- Todas las mujeres deberían estar en condiciones de tener un parto sin riesgo, con acceso a intervenciones médicas que podrían salvar su vida si surgieran complicaciones riesgosas para la madre o el niño/a.
- Las pruebas obligatorias para la detección del VIH y el embarazo infringen los derechos reproductivos y deben ser prohibidas. Para proteger los derechos reproductivos de las mujeres migrantes es preciso que tengan acceso a servicios de calidad, voluntarios y confidenciales de planificación de la familia y relativos al VIH, así como a la prevención y el tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual.

4. Remesas y acceso a servicios financieros para las mujeres migrantes:

- Al promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito económico - en países tanto de origen como de destino -, ello puede hacer que las remesas que envían las mujeres sean aún más eficaces para promover el desarrollo y reducir la pobreza.
- Para ello, es preciso proporcionar a las mujeres acceso a conocimientos financieros y a servicios bancarios y de inversiones, y otorgarles derechos de propiedad.

5. Trabajadoras domésticas:

- Es urgentemente necesario contar con políticas y programas que protejan los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas migrantes.
- Entre las medidas necesarias figuran: revisar las leyes laborales nacionales para asegurar que se ampare el servicio doméstico; crear conciencia sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y las obligaciones de los empleadores, inclusive mediante servicios anteriores a la partida y cursos de capacitación; celebrar acuerdos bilaterales entre los países de origen y los de destino que establezcan modelos de contratos y aseguren estándares laborales mínimos; fortalecer el papel de las embajadas en el trámite de denuncias y la provisión de albergue en casos de abuso en los países de destino; establecer líneas telefónicas de emergencia y organizaciones de apoyo que protejan los derechos de las trabajadoras; reglamentar las agencias de contratación y colocación, inclusive mediante el establecimiento de sistemas oficiales de acreditación; y enjuiciar a los empleadores y las agencias que cometen abusos.
- A nivel regional, debería entablarse una colaboración intergubernamental a fin de establecer normas mínimas para la protección de los derechos de las trabajadoras domésticas.

6. El papel de la sociedad civil y de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres:

- Al involucrar a representantes de las mujeres migrantes en los debates sobre políticas y la reforma es posible mejorar las respuestas a la feminización de la migración. Las mujeres migrantes pueden aportar elementos de juicio a eficaces procesos de formulación de políticas.
- Las asociaciones de mujeres migrantes han tenido un papel

prominente en la defensa de los derechos humanos y merecen que se las apoye.

- Otra manera de abordar las cuestiones de interés concreto de las mujeres migrantes es involucrar a las organizaciones y los sindicatos principales del país que se han comprometido en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, inclusive centros de investigación sobre migraciones y organizaciones de promoción de los derechos humanos.



Para consultar

Se puede acceder al informe completo en: [UNFPA](#)

Los desplazamientos de las mujeres responden a factores en origen y llegada distintos a los de los hombres, sus motivos son diferentes, así como los procesos y redes de inserción laboral son igualmente otros. Porque los procesos migratorios, los factores de expulsión y atracción no son neutros en materia de género, es importante contextualizar las migraciones femeninas en el marco de la globalización de una economía capitalista cuyos efectos más perversos impactan directamente a las mujeres de los países del Sur; de un proceso de feminización de la pobreza y en consecuencia de los movimientos migratorios; de un recorte del gasto público en materia de acción social.

En su llegada a los países de destino, tal como ha sido analizado por numerosos/as autoras, las mujeres se incorporan a un mercado laboral que, además de estar previamente desregularizado, flexibilizado y precarizado, se estructura en base a unos criterios de género y etnicidad que ordenan el sexo, nacionalidad y etnia de quien ocupa qué puestos de trabajo. La fuerte división sexual del trabajo dominante en el mercado laboral español implica que, una vez que las españolas acceden en mayor medida a los trabajos remunerados, se demande mano de obra femenina para las tareas y nichos laborales que tradicionalmente han realizado las mujeres, como son los servicios de proximidad, domésticos y cuidados.

Dos factores fundamentales influyen en ello: De una parte, el modelo

familista de Estado del Bienestar adoptado en España así como el progresivo recorte y privatización de los servicios de prestación social han hecho recaer sobre los propios hogares, y en especial, las mujeres, el peso de estas tareas de atención y cuidado.

Según el artículo "Feminización de las migraciones internacionales; una perspectiva desde el Derecho", de *MCs. Ana María Valido Alou, Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", 2007*, la aplicación de la perspectiva de género en el estudio de las migraciones internacionales contemporáneas ha presentado varias conclusiones de gran interés, a saber:

- a) Las mujeres se concentran más en las grandes y medianas ciudades como destino principal de inmigración, lo cual se explica por el tipo de actividad laboral que suelen desempeñar.
- b) La emigración enfrenta a las mujeres con entornos sociales diferentes en los que la distinción de género se establece a partir de relaciones sociales distintas a las de la sociedad de origen, lo cual determina un cierto reordenamiento de las relaciones de poder en el contexto de la familia.
- c) Las mujeres por lo general, acceden a un mercado laboral muy limitado, conformado por empleos de baja calificación con poca o ninguna perspectiva de promoción, bajos salarios, jornadas laborales de más de 8 horas. En la mayor parte de las ocasiones se constata una deficiente garantía de sus derechos laborales y ninguna oportunidad de adherirse a sistemas de asistencia y seguridad social.
- d) La proliferación de políticas migratorias internacionales de carácter restrictivo ha incidido en el uso por parte de las mujeres de vías irregulares para emigrar, estableciendo con ello relaciones de dependencia con otras personas. Un claro ejemplo es el matrimonio por conveniencia con ciudadanos del país receptor o con inmigrantes que tenga status de residente permanente para burlar las normas de migración y extranjería. Estas circunstancias hace a las mujeres más vulnerables al abuso y la explotación.
- e) Las mujeres son más proclives a ser víctimas de tráfico y el contrabando

internacionales de seres humanos, en tanto existe un conjunto de operaciones ilegales que tienen como objeto a la mujer, por ejemplo, la prostitución.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2011, de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Hubo cierta reducción de las corrientes migratorias hacia los países desarrollados durante la crisis e inmediatamente después -por ejemplo, en los Estados Unidos de América el número de extranjeros que ingresó en el país bajó de 1.130.818 en 2009, a 1.042.625 en 2010; en el Reino Unido la cifra descendió de 505.000 en 2008 a 470.000 en 2009; en España bajó de 692.228 en 2008, a 469.342 en 2009. Sin embargo, al no registrarse cambios trascendentales en los modelos de movimiento de personas, el contingente mundial de migrantes que se había constituido en el transcurso de varios decenios fue escasamente afectado: en 2010, se estimaba que el número total de migrantes internacionales en el mundo era de 214 millones de personas -es decir, un aumento con respecto a los 191 millones de 2005 (DAES, 2009).

**Para consultar**

Se puede acceder al informe completo en:

[Informe sobre las migraciones en el mundo 2011](#)

Por último, según el Hay un Informe del Estado de la Población Mundial 2011 llamado "7 mil millones de personas: su mundo, sus posibilidades" (pág.65), la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas estima que en el mundo actual, de 7.000 millones de habitantes, hay al menos 214 millones que están viviendo fuera del país en que nacieron.

**Para consultar**

Se puede acceder al informe completo en:

[Informe del Estado de la Población Mundial 2011](#)

En cuanto al último Informe del UNFPA DE 2012, denominado "Sí a la opción, no al azar, Planificación de la familia, derechos humanos y desarrollo", según se estima, hay 222 millones de mujeres que carecen de acceso a servicios fiables y de alta calidad de planificación familiar, así como a la información al respecto y a los suministros disponibles; esta situación las pone ante el riesgo de tener embarazos no deseados.

**Para consultar**

Se puede acceder al informe completo en:

[Informe UNFPA 2012](#)

Informe de la OIT: Trabajadoras y trabajadores migrantes: Hacia una igualdad de derechos y oportunidades", 2008

Fuente: [OIT](#)

2.2. MUJERES EXTRANJERAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD EN LA MATERIA (EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO)

2.2.1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y GÉNERO

Destacan los siguientes documentos en la materia:

- [Declaración Universal de Derechos Humanos \(1948\)](#)
- [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados \(1951\)](#)
- [Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer \(CEDAW\), \(1979\)](#)
- [Convención sobre los Derechos del Niño \(1989\)](#)

- Protocolo facultativo de la [Convención sobre los Derechos del Niño](#) relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000).
- [Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares \(1990\)](#): Esta Convención entró en vigor el 1 de julio de 2003 al alcanzar el número de ratificaciones suficiente. Sin embargo, el tratado también tiene limitaciones. Aunque su Artículo 16 declara que 'Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones', en ningún lugar se refiere la Convención de manera específica a las necesidades particulares de las trabajadoras migrantes.
- [Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños \(2000\)](#). Está suscrito por 117 Estados y ratificado por 62, entró en vigor en 2003. El tratado tiene como objetivos: prevenir y combatir el tráfico de personas, en particular de mujeres, niñas y niños; proteger y brindar asistencia a víctimas de la trata en lo referido a sus derechos humanos, y promover la cooperación entre los Estados Parte para hacer cumplir estos propósitos. Aunque el Protocolo es primordialmente un tratado de aplicación legal orientado a combatir el crecimiento del crimen organizado transnacional, contiene importantes disposiciones sobre la protección de los derechos humanos. Este informe explica que la trata de mujeres para la prostitución fue un asunto clave en la formulación del Protocolo. En el proceso de negociación hubo dos posiciones feministas dominantes:
 - a) Toda la prostitución es esclavitud sexual y por lo tanto todas las prostitutas migrantes deberían ser automáticamente consideradas como mujeres traficadas (esta postura fue

apoyada por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Formas Con temporáneas de Esclavitud);

- b) debe hacerse una distinción entre la prostitución forzada y la voluntaria (postura apoyada por la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, ACNUR y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]).

El resultado fue que el Protocolo finalizado no asumió que toda forma de prostitución es forzada. La definición de tráfico en el Protocolo de Palermo es ésta:

Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

(Extracto del Protocolo de Palermo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños).

- [Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire \(2000\)](#)
- [Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad \(2000\)](#)
- [Resolución 59/241, de la AG sobre Migración y desarrollo. Aprobada el 22 de diciembre de 2004, sobre la base del informe de la Segunda Comisión \(A/59/485/Add.2\)\]](#)

2.2.2. NORMATIVA EUROPEA DE REFERENCIA EN MIGRACIÓN Y GÉNERO

Destacan las siguientes referencias:

- *Consejo de Tampere (1999)*: Cuando los Jefes de Estado y de Gobierno europeos, reunidos en Consejo a finales de 1999 en la ciudad finlandesa de Tampere, decidieron impulsar la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, consideraron imprescindible el desarrollo de políticas comunes en materia de inmigración y asilo basadas en cuatro pilares fundamentales: la colaboración con países de origen, un sistema europeo común de asilo, una adecuada gestión de los flujos migratorios, y el trato justo a los nacionales de terceros países.
- *Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho a la reagrupación familiar.*
- *Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre, relativa al estatuto de residentes de larga duración.*
- *Directiva 2004/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.*
- *DIRECTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.*
- *Directiva 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.*
- *Directiva 2009/50/CE, del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado.*

2.2.3. MARCO CONSTITUCIONAL EN ESPAÑA Y PRINCIPALES POLÍTICAS ESTATALES

A tenor del Art. 13.1 de la Constitución Española (CE), "los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título, en los términos que establezcan los tratados y la ley." Esto significa que, en principio, los extranjeros tienen los mismos derechos fundamentales que los propios españoles, pero que la ley o los tratados internacionales pueden introducir diferencias en cuanto a su ejercicio. Sin embargo, esta posibilidad de introducir diferencias no es ilimitada.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, las limitaciones no pueden afectar a los derechos "que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que, conforme al artículo 10.1 CE, constituyen el fundamento del orden político español" (STC 99/1985), ni tampoco "al contenido del derecho tal y como lo configuran la propia Constitución o los Tratados internacionales suscritos por España", siendo así que "se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección" (STC 11/1981).

Las mujeres, en tanto que sujetos migratorios, a pesar de ser estructuralmente viajeras (Juliano 2000), no han sido objeto de las políticas de inmigración en el contexto español hasta avanzados los años noventa. Hasta entonces, ésta se había "delegado" y gestionado casi en su totalidad por parte de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). Una vez que el Estado español se piensa a sí mismo como "de inmigración permanente" y parece hacerse evidente el no retorno de la población extranjera, es cuando la cuestión de la integración comienza a plantearse en el marco legislativo y acción gubernamental.

Siguiendo los pasos al que fue el primer plan en materia de acción social

con inmigrantes elaborado por la Generalitat de Catalunya, en 1994 se preparó a nivel estatal el *I Plan Interministerial para la Integración Social de los Inmigrantes*, elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales en 1994 y aprobado por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre.

Según éste I Plan, "la alfabetización y adaptación cultural de la mujer tiene importancia estratégica, no sólo por su importancia numérica, sino por su papel esencial para lograr que toda la familia se adapte al nuevo contexto social".

Además, pretende ser un "marco de referencia para la Administración General del Estado, propuesta de acción para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y cauce para una participación activa de la sociedad civil a favor de la integración de la población inmigrante". Uno de sus puntos consistía en dotar a la mujer de estatuto jurídico, independiente del de su cónyuge, que garantice su autonomía y facilite su integración.

Para la consecución de estos objetivos, se crearon dos instrumentos y se adoptaron 26 medidas. Los dos instrumentos, que han seguido funcionando con distintas modificaciones a lo largo del tiempo, son:

- El Foro para la Integración de los Inmigrantes.
- El Observatorio Permanente de la Inmigración.

Por otra parte, el 30 de marzo de 2001, el Consejo de Ministros aprobó el **Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (GRECO) (2000-2004)**. El GRECO se autopresentaba como "la primera iniciativa preparada en nuestro país para afrontar el tratamiento de la extranjería y la inmigración desde todas sus vertientes". Cada una de estas líneas básicas se desarrollaba en 23 acciones que se concretan en 72 medidas propuestas por los distintos Departamentos ministeriales.

En los Presupuestos Generales del Estado del año 2005 se creó, por primera vez, un ***Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes***, así como al Refuerzo Educativo de los mismos.

Existen diversos Planes referidos a políticas concretas en los que se ha prestado una especial atención al colectivo inmigrante. En ese sentido, puede citarse:

- El IV Plan de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2006-2008.
- El Plan Estatal de Vivienda 2005-2008.
- El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008: contempla el codesarrollo como una de las líneas de actuación ligado a las políticas de inmigración y de integración de los inmigrantes.
- El Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, que se ha elaborado en el marco del Observatorio de la Infancia con la Comunidades Autónomas y con organizaciones sociales, incorpora expresamente el principio de "no discriminación", en virtud del cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional, étnico o social, el nacimiento o cualquier otra condición del niño. El Plan persigue promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos ante situaciones de riesgo de desprotección, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Y pretende promover medidas que respondan a las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas entre los que se encuentra "prestar una especial atención a los menores de etnia gitana, los hijos de trabajadores migrantes.
- El Plan de atención y prevención de la violencia de género en población inmigrante, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2009 y que se explicará en el epígrafe siguiente.

Otro instrumento importante para organizar la política estatal en materia de extranjería fue el ***PLAN ESTRATEGICO DE CIUDADANIA E INTEGRACION 2007-2010***, aprobado por Consejo de Ministros en febrero de 2007. Elementos fundamentales del enfoque que subyace al Plan son la idea de que el mismo se dirige al conjunto de la ciudadanía, tanto autóctona como inmigrada, porque la integración concierne a todos los miembros de la sociedad, y la idea de que hay que abordar las políticas de integración de manera integral u holística, y con una orientación proactiva.

Los principios del Plan:

1. El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona, dentro del marco de los valores constitucionales básicos.
2. El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.
3. El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural.



Para consultar

Fuente: [PLAN ESTRATEGICO DE CIUDADANIA E INTEGRACION 2007-2010](#)

Tras su evaluación, ese Plan ha sido reemplazado por el ***PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN 2011-2014***, aprobado el 23 de septiembre de 2011.



Para consultar

PLAN ESTRATÉGICO DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN 2011-2014

Su principal objetivo es fortalecer la cohesión social y viene avalado por un proceso de elaboración basado en el consenso y en la participación de todos los actores implicados en la gestión de la integración. Entiende la integración como un proceso de adaptación mutua, y diseña una política basada en acciones que se dirigen a todos los ciudadanos, tanto inmigrantes como autóctonos. Parte de la evaluación del Plan 2007-2010, del análisis del contexto migratorio mundial y español, con un diagnóstico de situación y tendencias.

Dado que las premisas sobre las que se configuró el primer Plan Estratégico se consideraron válidas y vigentes en el proceso participativo, para la elaboración de este segundo Plan se ha optado por mantenerlas. Dichas premisas son las siguientes:

- 1.^a La concepción de la integración como un proceso bidireccional, de adaptación mutua.
- 2.^a La convicción de que la responsabilidad del proceso de integración y de la gestión de la misma debe ser compartida por las distintas administraciones, la sociedad civil organizada, incluyendo las organizaciones de inmigrantes y el conjunto de la ciudadanía.
- 3.^a La concepción del Plan como un marco de colaboración capaz de dinamizar políticas, aglutinar iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones tanto del **sector público como de la sociedad civil**.
- 4.^a La necesidad de adoptar un enfoque integral o global, tanto en las políticas de inmigración como en las de integración y gestión de la diversidad.
- 5.^a La idea de que las políticas de integración, igualdad y gestión de la diversidad se dirigen al conjunto de la ciudadanía, y que las actuaciones públicas deben ir orientadas a promover y garantizar el acceso normalizado de toda la población con independencia de su origen o nacionalidad a los servicios públicos y privados de carácter general.
- 6.^a La incorporación transversal de las cuestiones relativas a la integración de la población inmigrada a todas las políticas públicas relevantes.

Cuatro principios inspiran la acción estratégica que se diseña en este Plan, los objetivos que propone y las actuaciones que pretende poner en marcha o fomentar:

- 1º. El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y española, dentro del marco

de los valores constitucionales básicos.

- 2º. El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, económica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.
- 3º. El principio de inclusión, que implica la creación de procesos que lleven a superar las desventajas sociales, económicas, personales y culturales y permitan que se esté en condiciones de gozar de los derechos sociales y ejercer la participación ciudadana superando el estatus de persona asistida y la estigmatización que conlleva la pobreza, la marginación y la exclusión.
- 4º. El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción positiva entre las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural.

El anterior Plan Estratégico 2007-2010 pretendía contribuir a la construcción de una sociedad justa, inclusiva y cohesionada, en la que la convivencia de todos se desarrolle sobre valores y normas comunes, respetando la diversidad de las personas y de los grupos sociales. Se ha avanzado mucho en este periodo en la lucha por la igualdad y por el ejercicio de los derechos y deberes. El presente Plan Estratégico 2011-2014 mantiene la vocación ciudadana del anterior y busca que las personas residentes en España se incorporen en la sociedad española en condiciones de equidad y participen de modo activo en la configuración de la vida pública.

Los ejes más importantes sobre los que se articula el presente Plan Estratégico responden al análisis de la realidad llevado a cabo, sobre la base de que se está abriendo un nuevo ciclo migratorio, tal y como se ha detallado en el capítulo 2 dedicado al Diagnóstico. Los énfasis de este segundo PECl, que marcan las prioridades del Plan y sirven como ejes transversales de actuación, son los diez siguientes:

1. **Derechos y deberes.** Garantía del ejercicio de los derechos y del acceso a los sistemas públicos de protección y bienestar social en igualdad de condiciones, y exigencia del cumplimiento por cada cual de sus obligaciones en el marco de una ética de la responsabilidad.
2. **Gestión positiva de la diversidad.** Acción institucional y social encaminada al respeto de las diversidades de origen, culturales, étnicas, lingüísticas y religiosas y a la interacción y sobre las semejanzas, lo común y lo compartido.
3. **Lucha contra la discriminación.** Promoción de la igualdad de trato y lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación.
4. **Inclusión.** Fomento de la equidad socioeducativa, la inclusión social y la calidad

de vida.

5. **Desarrollo local.** Vinculación positiva entre desarrollo local e inmigración, con el impulso de la generación de riqueza, empleo y promoción económica, así como de calidad de vida para todos y de enriquecimiento del tejido social de los municipios.
6. **Convivencia ciudadana intercultural.** Promoción de espacios de convivencia intercultural en los distintos ámbitos de la vida social, pasando de la coexistencia a la convivencia y previniendo y superando las situaciones de hostilidad.
7. **Barrios como espacios claves de la cohesión.** Impulso específico de la interacción positiva y de la convivencia comunitaria intercultural en las localidades con mayor presencia de diversidad cultural.
8. **Participación social.** Dinamización general de la participación ciudadana, impulso de asociacionismo, incorporación de los inmigrantes a los ámbitos generales de la participación, con especial relevancia al derecho de voto.
9. **Formación.** Formación del conjunto de actores institucionales y sociales para un desempeño adecuado de su función en materia de inmigración, asilo y gestión de la diversidad.
10. **Gobernanza multinivel.** Y cooperación territorial: gestión del Plan con el conjunto de las administraciones y los agentes sociales; participación

Como consecuencia de esos énfasis y ejes, y siempre en contextos en los que la diversidad cultural es significativa, los objetivos generales del Plan Estratégico son los siguientes:

Objetivo 1. Garantizar el pleno ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos.

Objetivo 2. Generar oportunidades sociales, económicas y de empleo que garanticen la calidad de vida.

Objetivo 3. Mejorar los niveles de acceso y uso de los servicios y prestaciones públicas, especialmente educación, salud, empleo, servicios sociales y dependencia, por parte del conjunto de la ciudadanía y en condiciones de equidad.

Objetivo 4. Adecuar las políticas públicas sectoriales y las estructuras de los servicios públicos a los retos y demandas de una sociedad diversa.

Objetivo 5. Adaptar los sistemas de acogida de personas en situación de vulnerabilidad y acogida especializada en todo el territorio nacional a las necesidades actuales derivadas de la evolución de los flujos migratorios, asegurando que les proporcionen un grado de autonomía suficiente para el acceso a bienes y servicios, ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones.

Objetivo 6. Fomentar políticas integrales para la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación que contemplen la prevención y denuncia de toda forma de racismo y xenofobia así como la protección y asistencia a las víctimas en todos los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado.

Objetivo 7. Reforzar la equidad en todas las etapas del Sistema Educativo, incluida la universitaria, la permanencia y el éxito académico.

Objetivo 8. Reducir los niveles de exclusión social, marginación y pobreza, con especial énfasis en la población infantil y juvenil.

Objetivo 9. Contribuir al desarrollo de una cultura democrática y participativa así como a la legitimidad institucional.

Objetivo 10. Impulsar procesos de construcción y desarrollo sociocomunitario que promuevan la convivencia intercultural, la mejora de las relaciones sociales, vecinales y laborales, el respeto a la diferencia y la gestión de la diversidad en un proyecto compartido de sociedad.

Uno de los instrumentos para la puesta en funcionamiento del presente Plan Estratégico es la ejecución de grandes Programas Interregionales de ámbito estatal con vocación plurianual. Estos Programas convierten los principales objetivos del Plan Estratégico en prioridades de intervención. Desarrollan los énfasis y líneas estratégicas centrales definidas previamente asegurando la coherencia de criterios, metodologías y actuaciones con los principios y premisas del Plan, posibilitando que se actúe de modo transversal e interterritorial para garantizar un uso efectivo de los recursos.

El desarrollo de estos Programas supone un modo de gestión coordinado y multinivel que integra a los distintos agentes que intervienen en el Plan: administración europea, estatal, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, ONG del ámbito de la inmigración y asociaciones de inmigrantes, así como el tejido empresarial y los sindicatos, que desarrollarán actuaciones en el ámbito de sus competencias. Incorpora diversos instrumentos financieros como convenios, subvenciones o gestión directa.

Los programas previstos son:

1. Programa de Gestión de la diversidad en la empresa. El mercado laboral es uno de los espacios más significativos para la integración en una sociedad como la nuestra. La mejora de las condiciones de vida laboral y la mejora de la productividad mediante la gestión de la diversidad es uno de los retos más importantes para los que debemos esforzarnos. El objetivo de este programa es convertir la Gestión de la

Diversidad en un compromiso corporativo.

2. Programa de Promoción de la Convivencia Ciudadana Intercultural en barrios (Plan de Barrios). Los énfasis del Plan proponen tanto la convivencia como el espacio local, como objetivos claves del Plan Estratégico. El barrio o la pequeña localidad son algunos de los ámbitos privilegiados de intervención, allá donde se dan relaciones vecinales y de proximidad. El Plan de Barrios es un programa transversal que implicará la incorporación de actuaciones relacionadas con varias áreas de intervención dirigidas a la regulación del conflicto, la igualdad de trato, la construcción de espacios de sociabilidad, los derechos sociales o la participación comunitaria. Las grandes líneas de actuación serán el fomento de la cohesión social y la mejora de las competencias para afrontar la crisis y se desarrollará a través de convenios con entidades locales que integren a los actores presentes en su ámbito territorial.

3. Programa de actuación sobre la enseñanza de las lenguas. Se han venido desarrollando diferentes programas y actividades de enseñanza de lenguas a la población inmigrante. Dando continuidad a lo anterior y con objeto de dotarlas de mayor calidad y reconocimiento, se plantea un método abierto y progresivo que permita sentar las bases para una política en materia de enseñanza de lenguas. Pretende avanzar en tres direcciones: elaboración de un currículum de referencia, la formación y cualificación del profesorado, y la acreditación y reconocimiento de la enseñanza.

4. Programa de Actuación Integral contra el Racismo y la Xenofobia: Extensión de Oficinas Antidiscriminación. El Plan Estratégico ha situado como uno de los énfasis principales la garantía del ejercicio de derechos y la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. La evolución de la percepción sobre el fenómeno migratorio y el crecimiento de actitudes y conductas discriminatorias y racistas suponen que la promoción de la igualdad de trato se haya convertido en una importante preocupación. Después de haber puesto en marcha diversas iniciativas y experiencias, el momento actual se centra en el diseño de una Estrategia Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia que prevea actuaciones integradas dirigidas a la prevención, la denuncia, la protección y la asistencia a víctimas. Además, la educación cívica, la sensibilización deben permitir la toma de conciencia de la sociedad sobre la importancia y dimensión real de este fenómeno y servir para transformar las representaciones y actitudes sobre el otro diferente en coherencia con los principios democráticos y de igualdad que fundamentan nuestra sociedad. Es preciso para ello el desarrollo de medidas y dispositivos que aseguren el cumplimiento de los objetivos transversales previstos en distintas áreas de intervención, para ello se propone la mejora y extensión de la red de oficinas de atención a las víctimas de discriminación,

impulsada desde el consejo de la igualdad de trato y no discriminación.

5. Programa de Formación del Empleado Público en Gestión de la Diversidad.

Uno de los elementos recurrentes en todas las áreas de intervención ha sido la necesidad de capacitar a los agentes sociales que intervienen en cada ámbito. Asegurar el acceso a los sistemas públicos de protección y bienestar social en igualdad de condiciones es uno de los elementos clave de la integración y la equidad, lo que implica que el empleado público presente en estos servicios públicos esté sensibilizado y capacitado. La mejora de la calidad de los servicios públicos revertirá no solo en la población de origen extranjero, sino en el conjunto de la población a través de la gestión de la diversidad cultural. Algunos de los efectos serán la mejora de la atención, la prevención de la conflictividad, la reducción del tiempo de atención, la racionalización del uso de los servicios, el aumento de la eficacia y la eficiencia o la adaptación de los sistemas a realidades diversas. Este programa prevé el desarrollo de acciones formativas: cursos, seminarios, jornadas, etc. dirigidos al empleado público, fundamentalmente en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, seguridad y justicia.

6. Programa de Capacitación del Tercer Sector en intervención comunitaria intercultural. El tejido asociativo y fundacional y, en general, las entidades sociales constituyen uno de los agentes clave en la gobernanza del Plan Estratégico. Es preciso establecer cauces de comunicación que permitan la colaboración, coordinación y también que asuman la ejecución de actuaciones y medidas. Este programa prevé la formación del personal del Tercer Sector en materia de metodología de animación comunitaria, de convivencia social intercultural, de gestión de la diversidad que pueda favorecer el desarrollo de proyectos locales. Es complementario al Plan Barrios.

7. Programa de Fomento de la Participación Ciudadana y el Asociacionismo.

La participación ciudadana debe crear condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Durante estos años se han desarrollado instrumentos de participación sectorial como los foros, el asociacionismo inmigrante o la extensión del derecho del voto que han permitido mejorar los niveles de integración. En este proceso hay luces y sombras, entre ellas los bajos niveles de participación de la población de origen extranjero en asociaciones y organizaciones de carácter general, la debilidad del tejido social inmigrante o su presencia más allá del ámbito sectorial. Este programa se dirige a consolidar los mecanismos ya existentes, a mejorar la presencia de población de origen extranjero en ámbitos comunes de participación, a crear o fortalecer órganos sectoriales o específicos de participación en contextos de diversidad, a reforzar el tejido asociativo o continuar la expansión del derecho del voto entre la población de origen extranjero.

8. Programa de Desarrollo de un Sistema de Indicadores de Integración, Convivencia y Ciudadanía. Puesta en marcha, mediante la cooperación de las administraciones y las organizaciones sociales, de una matriz de indicadores generales de integración y de indicadores de ejecución del PEI (de partida, proceso, resultado e impacto). Las áreas específicas con seis: Acogida, Empleo y Promoción Económica, Educación, Salud, Servicios Sociales e Inclusión y Movilidad y Desarrollo. Además, existen áreas transversales (Convivencia, Igualdad de Trato y lucha contra la discriminación; Infancia, juventud y familias; Género; Participación y Educación Cívica).

Fuente: [Ministerio de Empleo y Seguridad Social](#)

También hay Planes de las Comunidades Autónomas orientados a la integración de las personas inmigrantes. Y actuaciones específicas en el ámbito municipal.

A lo largo de los años, se han ido creando diversos **Organismos**:

- Foro para la Integración Social de los Inmigrantes se regula por el reciente Real Decreto 3/2006, de 16 de enero, reformado por RD 1164/2009, de 10 de julio. Su último informe ha sido publicado en 2011 y puede consultarse en: [Ministerio de Empleo y Seguridad Social](#)
- El Observatorio Permanente de la Inmigración se regula por Real Decreto 345/2001, de 4 de abril. Hace de coordinador de la Red Europea de Migraciones y Publica estadísticas que pueden consultarse en [Ministerio de Empleo y Seguridad Social](#)
- Consejo Superior de Política de Inmigración por Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, modificado por Real Decreto 507/2002, de 10 de junio y por Real Decreto 1600/2004, de julio. Ya ha desaparecido. En la actualidad las funciones de este órgano las ha asumido la Conferencia Sectorial de Inmigración. Constituida en el marco de las previsiones del artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, y del artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- La Comisión Interministerial de Extranjería se rige por el Real Decreto 1946/2000, de 1 de diciembre, modificado por Real Decreto 645/2002, de 5 de julio y por Real Decreto 1600/2004, de julio.

Para completar el cuadro institucional, hay que sumar a estos órganos de coordinación y participación, ya previstos en la Ley Orgánica:

- La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, creada en virtud de la disposición adicional decimoquinta del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 como órgano colegiado del que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de carácter estatal.

Estos cinco órganos colegiados están adscritos al actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración. La última estructuración de este organismo se ha realizado mediante *Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero (BOE de 11 de febrero)*.

Fuente: [Ministerio de Empleo y Seguridad Social](#)

2.3. EL RÉGIMEN GENERAL DE EXTRANJERÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La evolución de la legislación del régimen general de extranjería en España ha sido la siguiente:

- La vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, contiene la principal regulación de la inmigración. Ha sido reformada en cinco ocasiones, a través de las:
 - Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de

los extranjeros en España y su integración social.

- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
 - Ley 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que han modificado la redacción de algunos de sus artículos.
 - Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
 - Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Y tras la última reforma de la Ley, el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Con la aprobación del Real Decreto 2393/2004, en su día se abrió un *proceso extraordinario de normalización (febrero-mayo 2005)*, pues se consideró necesario ordenar la situación generada por la presencia de un número significativo de personas extranjeras que desarrollaban trabajos por

cuenta ajena en España de manera irregular, sin la previa obtención de la preceptiva autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Para ello, la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 2393/2004, por el que se aprobaba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, articuló un proceso extraordinario dirigido a la normalización de las relaciones laborales irregulares existentes entre personas empleadoras y personas trabajadoras extranjeras carentes de la preceptiva autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

2.4. EL RÉGIMEN ESPECÍFICO DE LA CIUDADANÍA COMUNITARIA

La regulación se encuentra en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero: artículo 9, última redacción según RD 1161/2009, sentencia del TS de 1 de junio de 2010 publicada en BOE 3/11/2010 y RD 1710/2011, de 18 de noviembre, BOE 26/11/2011.

Según este Reglamento en su versión consolidada, una persona española o nacional comunitario genera derecho de residencia (y posibilidad de que cursen estudios o trabajen en España sin necesidad de autorización administrativa previa) para diversos familiares como el cónyuge, la pareja de hecho registrada, los descendientes hasta 21 años (o mayores con incapacidad) y ascendientes a su cargo:

Artículo 2. Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan: (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio

2010).

- a) *A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- b) *A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- c) *A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- d) *A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial, o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*

Además, la regulación también aborda los supuestos en que fallece el familiar que genera el derecho, o se produce una salida de España del mismo, o una cancelación de su pareja de hecho, o separación o divorcio. La normativa establece la obligación de comunicar a la Administración esos cambios. Sin embargo, si se cumplen algunos requisitos previstos en la ley, sigue permitiendo conservar la situación de "residente comunitario". En otros casos, si no se dan esos requisitos, implica la pérdida de dicha condición de residente. Esto viene regulado en el artículo 9 que, tras una reciente reforma

en noviembre de 2010, dice lo siguiente:

Artículo 9. Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, cancelación de la inscripción como pareja registrada, en relación con el titular del derecho de residencia. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).

- 1. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su salida de España, o la nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, o cancelación de la inscripción como pareja registrada, no afectará al derecho de residencia de los miembros de su familia ciudadanos de uno de dichos Estados. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- 2. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el caso de miembros de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos Estados, tampoco afectará a su derecho de residencia, siempre que éstos hayan residido en España, en calidad de miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho. Los familiares tendrán obligación de comunicar el fallecimiento a las autoridades competentes. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- 3. La salida de España o el fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, ello hasta la finalización de éstos.*
- 4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, o cancelación de*

la inscripción como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha circunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguientes supuestos: (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010 y redactado, la totalidad de este apartado 4, conforme al Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre):

- a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio, o de la cancelación de la inscripción como pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).*
- b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia de los hijos del ciudadano comunitario, al ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.*
- c) Existencia de circunstancias especialmente difíciles como:*
 - 1º Haber sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.*
 - 2º Haber sido sometido a trata de seres humanos*

por su cónyuge o pareja durante el matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista un proceso judicial en el que el cónyuge o pareja tenga la condición de imputado y su familiar la de posible víctima, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine el derecho de visita, al hijo menor, del ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha resolución o acuerdo se encuentre vigente. (Afectado por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio 2010).

5. Cuando las Autoridades competentes consideren que existen dudas razonables en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 8 y 9, podrán llevar a cabo comprobaciones al objeto de verificar si se cumplen las mismas. Dichas comprobaciones no tendrán en ningún caso carácter sistemático. (Introducido por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre).

Este último párrafo parece haber sido introducido para la prevención de posibles fraudes de ley.

2.5. POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE ASILO CON RELACIÓN AL GÉNERO

La primera legislación sobre asilo en España era la Ley 5/1984, de 26 de

marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, que fue modificada en algunos aspectos mediante la Ley 9/1994, de 19 de mayo. Sin embargo, fue derogada por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que es la actualmente vigente.

Cuenta con un Reglamento de desarrollo específico, aprobado por Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, y modificado en algunos aspectos por los Reales Decretos 864/2001, de 20 de julio, y 2393/2004, de 30 de diciembre. Tras la nueva ley, no se ha aprobado nuevo reglamento.

De acuerdo con la normativa vigente, el Artículo 3 define así la condición de refugiado:

“La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9”.

Por consiguiente, uno de los posibles motivos de persecución es la pertenencia a un grupo social. Más adelante, el artículo 7 concreta qué ha de entenderse por grupo social y precisa que puede entenderse que lo componen individuos unidos por su orientación o identidad sexuales. Así, el artículo 7 establece:

“se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si, en particular las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse,

o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores". Y añade el artículo en otro párrafo: "En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual, y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. En ningún caso podrá entenderse como orientación sexual, la realización de conductas tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico español".

Y en un último párrafo menciona que dicha persecución por grupo social también puede darse por motivos de género: *"Asimismo, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye a las personas que huyen de sus países de origen debido a fundados temores de sufrir persecución por motivos de género y, o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo".*

De este modo, la persecución por motivos de género incluye:

- agresiones sexuales a mujeres por motivos de "honor",
- imposición de mutilación genital femenina,
- matrimonios forzados,
- supuestos de esclavitud sexual en casos de conflictos armados o sin ellos,
- violencia contra la mujer por sus propios familiares (cónyuge, padres, hermanos, etc.),
- negación de acceso a la educación, a la asistencia sanitaria o a determinadas profesiones por razones de género.

Cabe destacar que, según se recoge en el *Informe de CEAR (Comité Español de Ayuda al Refugiado) sobre Situación de las Personas Refugiadas en España en 2011*, la OAR (Oficina de Asilo y Refugio, órgano estatal en España

donde se solicita asilo) no desagrega por sexo los datos recogidos en sus boletines mensuales (en las memorias anuales tan solo aquellos relativos a los datos generales de solicitud y concesión de protección), ni especifica los motivos de persecución alegada que obligan a huir a las personas refugiadas. Este hecho dificulta la elaboración de análisis y conclusiones desde una perspectiva de género, atendiendo a circunstancias que afectan de forma diferencial a mujeres y hombres.

**Para consultar**

Algún caso de concesión de asilo por persecución de género.

Fuente: [Derechos de asilo y persecución por motivos de género](#)

(Contiene casos planteados en distintos países). Elaborado al menos en 2007.

**Para consultar**

Un caso concreto sobre Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo contencioso-administrativo en junio de 2011.

Fuente: [Diario Público](#)

**Para consultar**

Un estudio de la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala contencioso-administrativa de 13 de enero de 2009).

Fuente: [Junta de Andalucía. Igualdad y violencia de género](#)

**Para consultar**

Estudio de Carmen Miguel sobre concesión de asilo por casos de mutilación genital femenina, de 2008.

Fuente: [La mutilación genital femenina. Derecho de asilo en España y otras formas de protección internacional](#)

2.6. PREVISIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

2.6.1. EL PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN POBLACIÓN INMIGRANTE (2009-2012)

Ya se ha hecho antes alusión al Plan de atención y prevención de la violencia de género en población inmigrante, aprobado en 2009 y para 2009 a 2012 por el Consejo de Ministros. Parte de una justificación basada en la sobrerrepresentación de la población inmigrante tanto en las cifras de mujeres denunciadas de violencia de género, como en las de hombres denunciados, según datos del Informe de evaluación sobre la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y según la Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres de 2006, promovida por el Instituto de la Mujer.

El Plan señala tres posibles causas para esa sobrerrepresentación:

- Por un lado, las referencias sobre la desigualdad entre hombres y mujeres son más manifiestas en algunos de los lugares de origen de una parte de la población extranjera, lo que origina que el recurso a la violencia se revista de legitimidad y normalidad para los agresores y también para las víctimas.
- En segundo lugar, las especiales circunstancias en las que se encuentran en muchas ocasiones las mujeres extranjeras, ya sea por la carencia de redes de parentesco, amistad o paisanaje en España o por depender de las de su agresor, originan una inseguridad y dificultad superior a la de las mujeres españolas a la hora de romper con la violencia.
- Y en tercer término está el componente demográfico, que no sólo está relacionado con el factor cuantitativo del aumento de población

extranjera, sino que también lo está con el componente cualitativo, que se comporta como factor determinante con relación a los casos de VG. El grupo de edad en que se recurre más a la violencia y a los homicidios, tanto en españoles como en extranjeros, es el comprendido entre los 20 y los 49 años, y mientras que este grupo en la población masculina española representa el 46,9%, en la extranjera es el 64,0%³, circunstancia que indica que en la población extranjera hay más hombres en la edad que da lugar a más violencia contra la mujer, lo cual se traduce en una mayor incidencia de casos. También señalan las mayores dificultades de las mujeres extranjeras en el acceso a los recursos.

El Plan pretende ser integral, proactivo, global, multidisciplinar, social y con orientación individual. Comprende cinco ejes principales:

- Información.
- Formación.
- Sensibilización.
- Atención adaptada a las circunstancias de las mujeres víctimas de violencia de género.
- Medidas estructurales.

Cada Eje comprende objetivos específicos y medidas concretas.



Para consultar

Plan de atención y prevención de la violencia de género en población inmigrante.

Fuente: [Fedrom](#)

Existe igualmente un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, cuyo contenido se expondrá en el Módulo 5.



Para consultar

INFORME DEL FORO CON-FLUENCIA, ABRIL 2011: Inmigración y Violencia de Género.

Fuente: [Fedrom](#)

2.6.2. PREVISIONES ESPECÍFICAS EN LA LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2.6.2.1. En el régimen general

La Ley regula diversos supuestos:

A) MUJERES QUE SE ENCONTRABAN EN SITUACION ADMINISTRATIVA IRREGULAR EN EL MOMENTO DE TENER QUE DENUNCIAR POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Anteriormente solo se regulaba esta materia en el artículo 31 bis de la LOEX. El nuevo Reglamento, incorpora cuatro principales novedades incluidas el Título V, Capítulo II, artículos 131 al 134 y Capítulo IV, artículos 140 a 146.

El art.31 bis de la Ley insiste en que las mujeres inmigrantes que sufran violencia de género tienen que tener garantizados los derechos contemplados en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, sea cual sea su situación administrativa. Si al denunciar la situación de violencia, se pone de manifiesto su situación administrativa irregular, no se incoará expediente sancionador o, si se hubiera incoado antes, quedará en suspenso, así como cualquier orden de expulsión previa existente.

Esta protección contempla la posibilidad de solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales desde que se haya dictado en su favor una orden de protección, o si cuenta con un informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios de violencia de género.

La protección conferida no sólo se agota en la mujer, sino que se extiende a sus hijos e hijas. En el momento de presentación de la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo la mujer extranjera podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales en favor de sus hijos/as menores de edad, o con discapacidad y que no puedan proveer a sus necesidades, o de residencia y trabajo en caso de mayores de dieciséis años, que se encuentren en España en el momento de la denuncia.

Presentada la solicitud de autorización de residencia temporal y trabajo de la mujer víctima de violencia de género, el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente concederá de oficio una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de sus hijos/as menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista una orden de protección a favor de la mujer extranjera o un informe del Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género.

Concedida la autorización provisional a favor de la mujer extranjera, ésta implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial. La autorización provisional en favor de hijos/as mayores de dieciséis años tendrá el mismo alcance.

Cuando haya sentencia condenatoria, o resolución de la que se deduzca que hay violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se concederá a la mujer de permiso de residencia y trabajo por cinco años.

Terminado el proceso penal, el Ministerio Fiscal lo pondrá en conocimiento de la Oficina de Extranjería y a la Comisaría de Policía

correspondientes. De haber concluido con sentencia condenatoria o resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, la duración de la autorización será de cinco años. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de su titular de acceder en el curso de éstos a la situación de residencia de larga duración, a cuyo efecto se computará el tiempo durante el que hubiera sido titular de una autorización provisional. Esto será de aplicación, en su caso, a las autorizaciones solicitadas a favor de los hijos/as menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer sus necesidades.

Por último, a las víctimas extranjeras de violencia de género que se encuentren en situación irregular en España y que denuncien a su agresor, no se les incoará expediente de expulsión hasta que no se dicte sentencia. Pero si finalmente no hay sentencia condenatoria o resolución que indique que ha habido violencia, se iniciaría el trámite sancionador.

B) MUJERES QUE TENIAN RESIDENCIA DEPENDIENTE (POR REAGRUPACION) DEL AGRESOR EN EL MOMENTO DE TENER QUE DENUNCIAR POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En el artículo 19.2 de la Ley de Extranjería, se prevé la posibilidad de que el cónyuge reagrupado/a pueda obtener residencia independiente si sufre violencia de género. Esto viene desarrollado en el artículo 59 del Reglamento de Extranjería, que establece que el cónyuge o pareja reagrupado/a podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, cuando reúna alguno de los siguientes requisitos y no tenga deudas con la Administración tributaria o de Seguridad Social:

- a) Contar con medios económicos suficientes para la concesión de una autorización de residencia temporal de carácter no lucrativo.
- b) Contar con uno o varios contratos de trabajo, de duración mínima, desde el momento de la solicitud, de un año, y de los que se derive una retribución no inferior al Salario Mínimo

Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce pagas.

- c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la eficacia de la autorización de residencia y trabajo independiente estará condicionada a que se produzca, en caso de que no se hubiera producido con anterioridad, el alta del trabajador/a en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se concede aquélla. Cumplida la condición, la vigencia de la autorización se retrotraerá al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.

Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo independiente, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia, por separación de derecho, divorcio o por cancelación de la inscripción, o finalización de la vida en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia en España con el cónyuge o pareja reagrupante durante al menos dos años.
- b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una orden judicial de protección o, en su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Este supuesto será igualmente de aplicación cuando fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, una vez que exista una orden judicial de protección a favor de la víctima o, en su defecto, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de conducta violenta ejercida en el entorno familiar.

La tramitación de las solicitudes presentadas al amparo de este

apartado tendrá carácter preferente y la duración de la autorización de residencia y trabajo independiente será de cinco años.

Además, si había otros familiares reagrupados (ejemplo, los hijos/as comunes), conservarán la residencia concedida y de cara a su renovación, dependerán del familiar con el que convivan.

C) MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS

Se regula en el artículo 59 bis de la LOEX (última redacción dada por Ley Orgánica 10/11, 27 de julio, de modificación de los artículos 39 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y ahora se desarrolla reglamentariamente en el Título V, Capítulo IV, artículos 140 al 146.

Como novedades se establecen las siguientes:

- Se impulsará la adopción de un protocolo marco de protección de trata de seres humanos en el que se establezcan las bases de coordinación y actuación de las instituciones, y protocolos para su identificación, así como la forma de participación de organizaciones no gubernamentales que participen en programas desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y protección de las víctimas.
- En materia de plazos se establecen los siguientes: Cuando la identificación haya sido efectuada por las unidades de extranjería, éstas elevarán, en plazo máximo de 48 horas y previa conformidad de la víctima, la propuesta sobre concesión del periodo de restablecimiento y reflexión a la Delegación de Gobierno. La propuesta será favorable cuando estime que existen motivos razonables para creer que el extranjero/a es víctima potencial de trata de seres humanos, y en tal caso, incluirá la duración del periodo de reflexión, que será de al menos treinta días y, en todo

caso, suficiente para que el extranjero/a pueda restablecerse y decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos o hijas menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período.

- Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar.
- Durante la tramitación de la autorización de residencia y trabajo, se le puede dar una autorización provisional.

El Delegado competente resolverá la propuesta en plazo máximo de cinco días, pero será en plazo de veinticuatro horas si la víctima se encontrara en un Centro de Internamiento de extranjeros.

- En materia de autorización de residencia y trabajo, una vez resuelto favorablemente el procedimiento, la autorización tendrá vigencia de cinco años con la posibilidad de trabajar por cuenta propia o ajena en cualquier ocupación, sector de actividad y ámbito territorial.

El otorgamiento de un periodo de reflexión y recuperación, durante el

cual tengan derecho a recibir servicios y prestaciones con independencia de su situación en materia de inmigración o cualquier otra condición o de su capacidad o disposición para cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales es una exigencia de toda la normativa internacional sobre trata. Ello se debe a los efectos psicológicos tan devastadores de la trata, y su influencia en la capacidad de las víctimas para participar en la investigación o persecución del delito, así como a las consecuencias que su colaboración puede conllevar, para ella o sus familiares. Así, según numerosos estudios y normas internacionales. Este plazo deberá ser suficiente para que la persona "pueda restablecerse y escapar a la influencia de los traficantes y/o pueda tomar, con conocimiento de causa, una decisión en lo relativo a su cooperación con las autoridades competentes". En un estudio sobre los efectos de la trata en la salud de las mujeres, los agentes de policía consultados explicaron que el periodo de reflexión podía mejorar la capacidad de éstas para participar en el procedimiento penal contra el tratante.

D) REPERCUSIONES EN LA SITUACION ADMINISTRATIVA DEL AGRESOR

Es necesario no contar con antecedentes penales en la concesión de la autorización de residencia inicial (art.46 para residencia no lucrativa, art.64 para residencia y trabajo por cuenta ajena y art.105 para por cuenta propia, art.124 para arraigo) y puede producirse la denegación de renovación si existen antecedentes penales. Del mismo modo, por ese motivo también puede denegarse la concesión de la nacionalidad española.

2.6.2.2. En el régimen de ciudadanía comunitaria

Ya se ha expuesto en el epígrafe anterior el contenido del artículo 9, uno de cuyos puntos prevé la posibilidad de que una mujer con tarjeta de residencia como familiar de persona española o comunitaria la conserve si ha sufrido violencia de género por parte de su cónyuge o pareja registrada. Existe

un punto similar para las víctimas de trata de seres humanos por parte del cónyuge o pareja registrada.

2.6.2.3. En la normativa de asilo

Ya se ha expuesto en el epígrafe anterior que sufrir violencia de género por parte del cónyuge o pareja registrada podría dar lugar a la concesión de asilo por persecución de género, al igual que ser víctima de trata o de otras formas de violencia de género.



Para consultar

[Organización Internacional de Migraciones ó International Organization for Migration \(IOM\)](#) apartado de Género y migración.

[Organización Internacional del Trabajo \(OIT\) ó International Labour Organization \(ILO\)](#) tema de Igualdad y discriminación.

Su [base de datos sobre migraciones laborales](#) incluye datos desglosados por sexo.

[Human Rights Watch](#) tema de Derechos de la Mujer.

[ACNUR](#) (la Agencia de la ONU para los refugiados) en España contiene **Estadísticas sobre personas refugiadas y que buscan asilo**:

Tendencias en la Migración Internacional según estadísticas de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD, página en inglés): [OECD](#)

Las cifras hablan...



Según datos publicados por el INE en diciembre de 2012, la población en España era de 46.815.916 habitantes a 1 de noviembre de 2011

(fecha censal). De ella, el número de personas extranjeras era de 5.252.473 (un 11,21%).

% El 49,35% de las personas inscritas son hombres y el 50,64%, mujeres. Entre la población española hay más mujeres, mientras que en la extranjera predominan los hombres.

% Entre las personas venidas de fuera, han subido las europeas en 2011 en 45.494 personas (en total son 2.440.852), mientras que las extracomunitarias se reducen en 85.941 (son 3.270.188).

% Si entre la población española empadronada, el grupo de entre 16 y 44 años representa el 38% del total, entre la inmigrante este porcentaje se eleva hasta el 60%.

% La evolución reciente de la fecundidad difiere entre las mujeres españolas y extranjeras residentes en España. Entre las españolas, el número medio de hijas o hijos por mujer se mantiene en 1,33 desde 2010. Entre las extranjeras decreció hasta 1,61 en los seis primeros meses de 2011, desde el 1,64 observado en 2010. La edad media a la maternidad sigue siendo muy distinta en ambos colectivos, estimándose, para ese mismo periodo, en 32,0 para las españolas y en 28,8 años para las extranjeras. **Fuente:** INE

% Si en 1996 algo menos del 5% de las personas nacidas eran hijos o hijas de madre o padre extranjero, esa proporción ha ido aumentando año tras año hasta llegar al 19,1% del total en 2011. **Fuente:** INE

% Si los 9.198 matrimonios con al menos un cónyuge extranjero en 1996 suponían algo menos del 5% del total, en la primera mitad de 2011, suponían el 23,0% de los matrimonios heterosexuales celebrados en España. **Fuente:** INE

% ¿Y de qué países vienen? Sobre todo, de Rumanía, un país de la UE que tiene a 895.970 personas en nuestro país. Este colectivo se ha incrementado en 30.263 personas respecto al año anterior, un 3,5%.

A la población rumana le sigue la británica (397.535) y la alemana (196.729). Entre la población extranjera no comunitaria, destacan la marroquí (783.137), la ecuatoriana (306.380) y la colombiana (244.670). **Fuente:** INE

% Según la Encuesta de Población Activa (EPA), de la población activa de 21.530.100 que había en España en 2006 (segundo trimestre), el 12,8% (2.754.800) era extranjeros y el 11,2% (2.413.600) extranjera no comunitaria. El 55% son hombres y el 45% mujeres. En 2012, la población activa alcanza 23.072.800 personas. La distancia entre las tasas de actividad de españoles y extranjeros supera los 18 puntos a favor de estos últimos, circunstancia explicada fundamentalmente por la diferente estructura por edades de unos y otros. **Fuente:** INE

% En 2012, por nacionalidad, entre la población española hay 298.500 personas paradas más, frente al aumento de 67.400 personas paradas extranjeras. La tasa de paro de la población extranjera es del 36,95%, casi 15 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española.

% En datos de 2005, mientras el 85 por ciento de la población española habitaban en viviendas de su propiedad, sólo el 37 por ciento de la extranjera estaba en esa situación.

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007, del Instituto Nacional de Estadística (no se ha vuelto a realizar).

3. LA IGUALDAD DE GÉNERO ANTE EL DERECHO TRIBUTARIO

El hombre como medida de todas las cosas:

"La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él. La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, es el Absoluto; ella es la Alteridad" (Simone de Beauvoir).

Para poner en práctica...



¿Crees que la decisión de un Estado de subir el transporte público puede afectar de la misma manera a mujeres que a hombres?



¿En qué medida las deducciones por cargas familiares en un impuesto sobre la renta pueden aumentar, disminuir o resultar indiferentes desde el punto de vista del género?



¿Conoces algún organismo en España que estudie los impuestos desde el punto de vista de su repercusión sobre mujeres y hombres?

3.1. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA NORMATIVA TRIBUTARIA

Algunas autoras consideran que el Fisco, entendido desde un punto de vista funcional como la actividad financiera del Estado, como la necesidad de obtener tributos para financiar el gasto público, tampoco es ajeno al androcentrismo. Éste afecta tanto a su regulación jurídica (al legislador/a fiscal) como a su aplicación y a su enseñanza, es decir, que puede hablarse de un "androcentrismo fiscal", consecuencia del androcentrismo económico que ha imperado durante siglos. En ese sentido, existe androcentrismo fiscal

cuando se concibe al hombre como sujeto de la actividad económica y a la mujer como miembro-objeto de la comunidad conyugal.

Además, el androcentrismo fiscal existe porque, como pudo apreciarse en los datos estadísticos contenidos en el Módulo 2, muy pocas mujeres ocupan cargos relevantes en los Ministerios de Economía y Hacienda y en el Banco de España y pocas son profesoras en estudios fiscales (del profesorado de la disciplina del Derecho Financiero y Tributario, el 29,88% son mujeres y el 70,12% de hombres (115 frente a 49). Y el 82,76 % de las cátedras las monopolizan los hombres (48 frente a 10 mujeres).

Por otra parte, la importancia de la normativa fiscal es evidente, pues las normas financieras constituyen una perspectiva esencial para determinar y cuantificar las políticas públicas, en su previsión de gasto a través del presupuesto, a la vez que fija el grado de contribución-solidaridad que se exige a la ciudadanía a través del pago del tributo. La pretendida igualdad material comporta una tarea de conformación activa de los poderes públicos, y es aquí donde el gasto ocupa un papel básico, tanto efectuando específicas políticas igualatorias como evaluando el distinto impacto que posee según el rol social que se desempeñe.

El art. 31.2 de la Constitución Española señala que "El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía". En tal precepto el gasto público se haya vertebrado por tres principios: el principio de equidad, y los denominados criterios de eficiencia y economía. El primero es un principio de carácter eminentemente valorativo, mientras que en los otros prima un carácter más técnico del gasto público. La delimitación del contenido de tales principios no es fácilmente aprehensible, y más problemático aún resulta la relación que ha de existir entre ellos, no necesariamente antagónica, pero si necesitada de una ordenación.

El principio de equidad o justicia resulta uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico según el art. 1.1. CE, y posee diversas manifestaciones normativas destacando su concreción institucional en la conformación de un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional. La equidad, la justicia, que se procura con la redistribución de los recursos puede efectuarse tanto a través de la adecuada distribución de ingresos como con la asignación del gasto. En tal sentido se puede hablar de que la justicia financiera "resulta tanto del justo reparto de la carga tributaria como del equitativo destino que se dé a los recursos obtenidos". La justicia del gasto, si bien no es un derecho subjetivo de los ciudadanos, sí constituye un mandato a todos los poderes públicos, no tan sólo a la Administración, sino también, y sobre todo, al Poder Legislativo. Así se evidencia del propio art. 31 CE en relación al art. 53.1 de la CE. El gasto justo resulta así un principio jurídico, no meramente retórico, pues posee vinculatoriedad y obligatoriedad en su respeto, exigencia e implantación.

Si bien es cierto, como señala la STC 45/1989 al hablar del sistema fiscal, que «la igualdad absoluta, matemática, es, ciertamente, tal vez un ideal inalcanzable en cada caso concreto [...], el sistema debe tender hacia ella».

La equidad del gasto se ha de vincular con los derechos y libertades de las ciudadanas y, en concreto, con los principios rectores de la política social económica contenidos en el Capítulo III del Título I de la CE (preceptos del art. 39 al 52). Así, la doctrina acostumbra a delimitar el contenido de dicho principio desde una perspectiva positiva y negativa, o sea, concretando los gastos que son justos y aquellos que no lo son. Desde el punto de vista negativo se alude al gasto arbitrario, al gasto que comporta discriminaciones, que promueve desigualdades, al gasto que, en general, contradice los valores constitucionales. Desde el punto de vista positivo se acota en la ordenación de tales recursos para "promover que las condiciones para la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas" (art. 9.2 CE) y en conseguir la aplicación efectiva de los principios rectores de la política social y económica contenidos en los arts. 39 a 52 de la CE. En tal

sentido, en la equidad, se ha de entender integrada por el principio de igualdad ante la Ley (en la Ley y en la aplicación de la Ley) del art. 14 C.E.

La conformación del Estado como Social, como prestador, aboca a plantear el principio de igualdad desde su eficacia. Conlleva, no solamente la declaración de tal principio, sino el hecho que se garanticen las condiciones materiales para su ejercicio real y efectivo. Así pues, en la «asignación equitativa de los recursos públicos», se ha de entender implícito el mandato de igualdad del art. 9.2 CE, lo que conlleva afirmar la legitimidad de medidas de acción positiva para corregir y superar las desigualdades de origen y lograr la igualdad real y efectiva, no tan solo desde perspectivas de igualación económica, sino también desde el género.

El Tribunal Constitucional señala que «no puede reputarse discriminatoria y constitucionalmente prohibida -antes al contrario- la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que los Poderes Públicos emprendan en beneficio de determinados colectivos, históricamente desprotegidos y marginados, a fin de que mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial». (SSTC 216/1991, F.J. 5º y 28/1992, F.J. 3).

En igual sentido, la filósofa Victoria Camps afirma: "Al Estado corresponde, porque nadie sino un poder central puede hacerlo, redistribuir los bienes básicos - materiales y espirituales - de forma que las posibilidades de intervenir y participar en la toma de decisiones sea una posibilidad real para todos los ciudadanos.

Los anteriores planteamientos aplicados a la mención de gasto equitativo implican que éste ha de ser un gasto que posibilite la realización de una igualdad real y efectiva, un gasto igualitario en términos de género; el principio de economía afirma la necesidad de alcanzar los objetivos determinados a un costo mínimo y, por otro, la eficiencia pretende obtener un máximo de objetivos partiendo de un concreto gasto.

El reconocimiento de dichos principios implica la introducción de técnicas de gestión y control propias del sector privado al público.

El principio de estabilidad presupuestaria fue inicialmente regulado en la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. No se presenta como un mecanismo para alcanzar los principios jurídicos que legitiman al gasto, en última instancia la equidad del gasto público, sino como el elemento base para el desarrollo económico, para un desarrollo técnico-económico aparentemente aséptico. La legislación sobre estabilidad presupuestaria no menciona al principio de equidad o justicia en el gasto cuando, según lo examinado en el art. 31.2 de la CE, resulta el principio básico del gasto público.

Con posterioridad, el principio de estabilidad presupuestaria ha sido introducido en el artículo 135 de la Constitución, en redacción según Reforma del artículo 135 de la Constitución española, de 27 de septiembre de 2011:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a

las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
 - La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
 - La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
 - La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

Los presupuestos públicos no son simples instrumentos de gestión del sector público y de la política económica, sino que constituyen el marco básico en el que se configura el modelo de desarrollo socioeconómico al establecer los criterios de redistribución de la renta y dotar de eficacia a los objetivos políticos. Por tanto, no se trata de un mecanismo aséptico y exclusivamente

técnico, pues determina la concreción de las políticas públicas y sociales a aplicar. En definitiva, constituye el reflejo de las políticas y las prioridades de los gobiernos.

3.2. LOS PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En este capítulo, seguimos el artículo "ANÁLISIS JURÍDICO DEL GASTO Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO COMO INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO", del Dr. Miguel Ángel Sánchez Huete, Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado en Derecho, Género e Igualdad, Cambios en las estructuras androcéntricas II, del Centre Antígona (Grupo Antígona y "Dones i Drets").

El presupuesto es una valiosa herramienta para plasmar los valores de equidad, igualdad y justicia social. El presupuesto, desde la perspectiva de género no es neutral ya que los ingresos y gastos originan un impacto diferente en las mujeres y los hombres, pues los roles que desempeñan dan lugar a consecuencias diversas. Y si no se tiene en cuenta ese impacto, el presupuesto no será neutral sino "ciego" al género.

La igualdad de oportunidades es un ámbito que necesita aplicarse y ser aplicado con una visión transversal y compleja. Así la justicia del gasto no solamente nos indica un reparto equilibrado del mismo sino, y sobre todo, un gasto equilibrado en términos de género superador de los condicionantes las políticas públicas con perspectiva de género se ven en disposiciones del Derecho financiero, tanto en su dimensión de ingresos -Derecho Tributario- como de gasto -Derecho Presupuestario-.

Se ha de tener presente que existen gastos públicos condicionados por factores de género, bien directamente por su destino a tales políticas, bien indirectamente por el diferente impacto que originan en hombres y mujeres.

Ejemplo de la beligerancia del gasto público en tal contexto se puede apreciar en el gasto en transporte de agua y en sanidad pública. En el continente africano, una de las tareas primordiales y necesarias es el transporte de agua y supone una importante inversión de tiempo y esfuerzo –en 1993 los hogares rurales africanos dedicaban un promedio de 1 hora y 40 minutos- que corre a cargo de la mujer. Por otro lado, una política austera del gasto público sanitario tendente a reducir el tiempo de permanencia en los hospitales comporta transferir la carga de dicho cuidado a la familia, al miembro que tradicionalmente se le ha encargado tal cometido, a la mujer lo cual a su vez conlleva además de implementar su trabajo en el hogar y coartar sus posibilidades de ocupación fuera del mismo.

Resulta así que no es suficiente el gasto social, es preciso orientar el mismo desde una perspectiva en que se contemple al género, también en el presupuesto público, en la delimitación de objetivos y necesidades -aspecto cualitativo- y en la asignación de recursos -criterio cuantitativo-. Dicha necesidad fue puesta en evidencia en la Plataforma de Acción de Beijing que aprobó la integración de la perspectiva de género en la totalidad de las políticas como estrategia efectiva para promover la igualdad entre los sexos, afirmando que “[...] los gobiernos y otros agentes sociales deberían promover una política activa y visible de integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas de modo que se analicen sus efectos sobre mujeres y hombres, respectivamente, antes de adoptar decisiones”. Se propugna la integración de dicha perspectiva en todas las políticas públicas en todas sus fases -planificación, ejecución y evaluación- así como en todos sus ámbitos de actuación.

Comporta, en definitiva, una evaluación sobre la base de incorporar esta perspectiva en todos niveles del procedimiento presupuestario, y reestructurando ingresos y gastos con el fin de promover la igualdad de género. Tal y como indican Sharp y Broomhill (2002): “Son un mecanismo para establecer si los compromisos del gobierno con respecto a la igualdad de géneros se plasma en sus compromisos presupuestarios.”

El Parlamento europeo señala " [...] que las estrategias del gender budgeting requieren una coordinación interministerial que una los ministerios de Presupuesto, de Economía y de Hacienda con el ministerio y los departamentos y organismos responsables de la Igualdad de Oportunidades, asegurando la participación de todos los responsables y funcionarios de los distintos sectores que participan en la construcción del presupuesto público, con el fin de que la perspectiva de género se integre en la determinación de los ingresos y los gastos de todas las políticas presupuestarias (*Resolución del Parlamento Europeo sobre el gender budgeting (integración de la perspectiva de género en el presupuesto) - elaboración de presupuestos públicos con una perspectiva de género (2002/2198 (INI)*).

Se han desarrollado diversas metodologías con respecto a los presupuestos de género; entre ellas destacan principalmente la propuesta por Debbie Budlender y Ronda Sharp (1998), Diane Elson (1997) y Catherine Rake (2002). Una de las herramientas más importantes es la conocida como Gender Impact Assessment (evaluación de la repercusión de género). Dicha evaluación se centra en efectuar análisis que van más allá del ámbito de la familia o el hogar, analizando a la persona específica, y que alcanzan más allá de la economía pública y remunerada, llegando a los ámbitos particulares y no remunerados en los que las mujeres y sus labores de vocación social están generalizadas en la actualidad. Asimismo, toma en consideración las consecuencias a largo plazo de las políticas y tiene en cuenta las diferencias existentes en las respuestas de mujeres y hombres a las iniciativas económicas.

La teoría y la práctica de los presupuestos de género ha ido creciendo a medida que se ha comprendido en mayor grado que las políticas económicas pueden contribuir a reducir o ampliar las diferencias de géneros en un amplio espectro de ámbitos de políticas entre los que se incluyen la sanidad, educación, bienestar, transporte y desarrollo; por ello, las iniciativas de

presupuestos de género pueden aplicarse a cualquier ámbito de las políticas de un gobierno.

Asimismo, los presupuestos de género se pueden aplicar tanto a políticas de alcance macroeconómico y microeconómico así como al gasto y a ingresos públicos. En la práctica, el alcance de las iniciativas de los presupuestos de género varía desde el análisis de la totalidad del presupuesto de un país hasta el análisis más detallado de los programas o ministerios seleccionados o, reduciendo aún más el ámbito, el análisis del gasto en nuevos proyectos, formas específicas de recaudación de ingresos, cambios en el sistema fiscal o la implantación de legislación nueva. El grado en el que esto se aplique en la práctica dependerá del compromiso del gobierno con respecto a los presupuestos de género, recursos y conocimientos disponibles, presión nacional e internacional, etc.

Según ha demostrado el ejemplo de Australia, el éxito de las iniciativas de presupuestos de género es limitado si no se cuenta con la participación de grupos de la sociedad civil que mantengan la presión y aporten conocimientos especializados. A menudo, las personas que participan en estos grupos lo hacen en paralelo a los responsables del gobierno lo cual ayuda a que mantengan una buena relación de trabajo. Asimismo están en disposición de llevar a cabo estudios e investigaciones e incluso pueden proporcionar sesiones de formación a los miembros del personal del gobierno. En el caso de los ejemplos de Sudáfrica, Tanzania y Uganda, los grupos de organizaciones no gubernamentales han trabajado en colaboración con el gobierno, en su calidad de "amigos críticos" y también dirigiendo la atención de los gobierno a los temas de igualdad de género.

En España, la LO 3/2007, de 23 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incorpora la perspectiva de género en todas las actuaciones de los poderes públicos. Su art. 15, afirma que "El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las

Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades."

Para tener la igualdad de trato presente en las etapas del ciclo presupuestario, hay que fijarse en la asignación del gasto y la de control o evaluación de su ejecución.

3.2.1. LA ASIGNACIÓN DEL GASTO

Comporta, en primer lugar, una tarea de visibilización, de reconocimiento formal de una necesidad, y de una eventual dotación (reconocimiento material o pecuniario). En tal fase es particularmente relevante el trabajo que efectúan las mujeres en el cuidado del hogar y de la familia, que no han sido contabilizadas como parte de la economía productiva y restan desconocidas e infravaloradas. Se han de reconocer las contribuciones remuneradas y no remuneradas, que diferenciadamente hombres y mujeres aportan en la producción de bienes y servicios.

Así, en esta fase a veces se plantea cómo valorar lo aportado en el ámbito doméstico, de manera que se compute como ingreso, y también, cómo fijar una posible remuneración (en la partida de gastos) en reconocimiento.

Asimismo, en tal momento, se han de decidir políticas presupuestarias equitativas e igualitarias destinadas a promover la igualdad de oportunidades con el fin de superar los roles sociales asignados. La planificación y estimación del presupuesto requiere unir, el conocimiento sobre los roles y las relaciones de género, y el conocimiento sobre el Derecho Presupuestario.

Se ha de tener presente la existencia de una división social por razón del género, entre la vida privada y la vida pública. Al ámbito privado, se le asocian tareas relacionadas con la reproducción humana y se vincula a la

esfera de actividad de la mujer. El ámbito de lo público se asocia a lo productivo y a la participación en los asuntos colectivos, y se vincula a la actividad del hombre. Es así, como las esferas sociales y las actividades que le son propias se asignan por razón del sexo haciendo difícil a los integrantes de uno y otro grupo la realización de las actividades del otro. Por ello es necesario la superación de las barreras creadas entre el género masculino y femenino, de manera que lo público no sea el ámbito exclusivo de lo masculino ni lo privado de lo femenino. Tal perspectiva requiere no tan solo posibilitar el acceso a los ámbitos tradicionalmente acotados a cada género sino el consensuar los valores imperantes para que dicho acceso sea fluido.

Sobre el reconocimiento y valoración de las tareas de cuidado del hogar y de los miembros del mismo –personas mayores e infancia- las posibles medidas adoptar son variadas y pueden girar, bien en torno a un reconocimiento público -mera visibilización o reconocimiento formal-, o bien en el establecimiento de un beneficio patrimonial -reconocimiento pecuniario-, ya sea dejando de ingresar, como deducción fiscal, ya sea como prestación pública e incluso cabe una medida mixta. La Ley gallega 7/2004, de 16 de julio para la igualdad propone el reconocimiento formal de la aportación al trabajo domestico si bien en una cuenta satélite. Se trata de un reconocimiento contable en un ámbito desgajado de la Ley presupuestaria.

Así señala su Exposición de Motivos "Hace falta que cualquier iniciativa legislativa destinada a promover el acceso de las mujeres al mercado laboral retribuido en condiciones de igualdad tome en consideración el trabajo gratuito que realizan estas en el ámbito doméstico, ya que el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares de Galicia ha condicionado tanto el marco analítico como las políticas de integración de las mujeres en el empleo remunerado. En Galicia la mayor parte de la población ve garantizada su supervivencia y bienestar a través de redes familiares constituidas mayoritariamente por mujeres, una contribución que es necesario valorizar y reconocer públicamente. El Gobierno gallego acaba de dar un paso en esta dirección elaborando y difundiendo una cuenta satélite de producción

doméstica de Galicia; según la misma, la valoración económica de los servicios domésticos y personales no remunerados y destinados al autoconsumo estima un valor añadido bruto generado para el año 2003 de 15.150 millones de euros, lo que supone el 37% del producto interior bruto."

Así, es posible adoptar otras perspectivas que introduzcan otras variables para que el gasto resulte más equitativo en términos de género. En tal contexto existen dos categorías de gastos a considerar:

1º Los gastos o inversiones orientadas específicamente a garantizar la implantación de la igualdad de oportunidades. En tal contexto no solamente se integran los destinados a la acción positiva sino también los que fomentan la cultura de igualdad, al cambio de patrones y roles sociales.

2º Los gastos, que si bien son genéricos destinados a toda la ciudadanía, poseen especial impacto en claves de género. Son los gastos destinados al cuidado humano y reproducción. Partiendo de una clasificación de gastos tradicional se pueden adoptar nuevas perspectivas transversales de género que contextualizan y explicitan las diversas realidades en función del rol que se ocupa en el contexto social.

Resultan de gran relevancia las técnicas presupuestarias empleadas pues la forma o técnica de elaboración y aprobación de los presupuestos condiciona al contenido de los presupuestos, de modo que influye tanto en la decisión de en qué y cómo se gasta. Por ello es importante determinar las actividades de la Administración en función de la obtención de un resultado que responda a los objetivos propuestos, estimando su coste. En definitiva, se ha de tener presente la clasificación del gasto público en programas (arts. 35 y 40 de la Ley General Presupuestaria).

Esta técnica integra una visión más dinámica y permite un seguimiento en programaciones plurianuales. Asimismo, permite medir con mayor precisión

el grado de eficiencia en la asignación de los recursos. En tal sentido en los Presupuestos Generales del 2009 se establece el programa de promoción de la mujer cuya configuración técnica ha sido criticada en relación a otros periodos. En concreto PIÑA GARRIDO, refiriéndose al Presupuesto de 2004, por no establecer con claridad un gran objetivo estratégico ni una adecuada ordenación del resto de los objetivos.

3.2.2. EL CONTROL DEL PRESUPUESTO

Se ha de evaluar el logro de objetivos importantes para las mujeres, además de para los hombres. En tal contexto, resulta muy relevante la evaluación del gasto efectivamente realizado y su adecuación, no solamente a la legalidad sino también, y sobre todo, de acuerdo a su eficacia. Eficacia en la consecución de los objetivos a los que se destinaban los créditos aprobados, para determinar cómo se han cumplido las prioridades establecidas, con carácter general y, específicamente en lo que se refiere a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre en la distribución de recursos y servicios públicos.

En tal contexto, resultaría de gran relevancia que el Tribunal de Cuentas -supremo órgano de fiscalización externa del sector público- emitiera de forma específica y expresa un juicio sobre la adecuación de los objetivos pretendidos a los medios utilizados en los programas que hagan referencia o tenga alguna repercusión a las políticas de oportunidades. En la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 -Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo,- se recoge, siguiendo la trayectoria introducida por la Orden EHA/857/2005, que la Comisión de análisis de Programas, entre sus funciones, evaluará el impacto de los programas de gasto en igualdad de género. También dentro de la clasificación de programas de gasto dentro de Servicios Sociales y Promoción Social, se incluye la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres cosa que se mantiene en los ejercicios siguientes. También se prevé en los presupuestos generales de 2009 un plan de actuación -el 00010- el Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Por su parte el legislador autonómico se ha mostrado sensible y reconoce la virtud transformadora del gasto presupuestario en material de género, así cabe señalar la Ley gallega 7/2004, de 16 de julio para la igualdad hace expresa mención como objetivo para erradicar los prejuicios de género en su art. 5 "4. Estas medidas irán acompañadas de los oportunos programas y consignaciones presupuestarias para que todas las cargas doméstico-familiares sean objeto de corresponsabilidad familiar y reciban la protección económica y social correspondiente."

También la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía prevé expresamente un enfoque de género en el presupuesto a través de dos mecanismos principalmente:

- La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con la emisión de un informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto, mediante el impulso de anteproyectos de las diferentes consejerías con perspectivas de género.
- La realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía.



Para consultar

En Andalucía, se elabora cada año un informe de impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Para acceder al último.

Fuente: [Junta de Andalucía](#)

Documento de información sobre Presupuestos de género de la Red informal de expertos en presupuestos de género del Consejo de Europa:

Siguiendo este Documento, en un Apéndice se contiene como Tabla 1: *Herramientas de análisis de género en los presupuestos* (extraído de Diane Elson (1997), "Tools for gender integration into macroeconomic policy" en

Link to Gender and Development, 2, Verano, p. 13):

1. Evaluación de políticas "conscientes" del género.
2. Evaluaciones de beneficiarios desglosados por género.
3. Análisis desglosado por género de la incidencia en el gasto público.
4. Análisis de incidencia fiscal desglosado por género.
5. Análisis desglosado por género de la repercusión del presupuesto en el uso del tiempo.
6. Marco de políticas económicas a medio plazo "consciente" del género.
7. Informes de presupuestos "conscientes" del género.

Y examinar en el mismo documento la *Tabla 2 sobre [Métodos de introducción del análisis de género en el proceso presupuestario](#)* (extraído de Rake (2002), "Gender budgets: The experience of the UK's Women's Budget Group").

Fuente: [Red Europea de Presupuestos de Género](#)



Para consultar

Diseño de la estrategia que permita la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, dirigida por Paloma Villota para el Observatorio de Igualdad en 2007-08.

Fuente: [Instituto de la Mujer](#)



Para consultar

PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO; APLICACIÓN PRÁCTICA. Autoría: Sheila Quinn, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs. Council of Europe. 2009.

Fuente: [Consejo de Europa](#)



Para consultar

INFORME SOBRE EL GENDER BUDGETING (INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO) – ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Autoría: Fiorella Guillardotti. Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. Parlamento Europeo. 2003.

Fuente: [Parlamento Europeo](#)



Para consultar

PRESUPUESTOS PÚBLICOS EN CLAVE DE GÉNERO, Autoría: Emakunde (Guía para la elaboración de presupuestos públicos en clave de género).

Fuente: [Emakunde](#)



Para consultar

PRESUPUESTOS LOCALES CON ENFOQUE DE GÉNERO, Autoría: Emakunde. 2006.

Fuente: [Emakunde](#)



Para consultar

Estrategias para la integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, Instituto de la Mujer, 2008.

Fuente: [Instituto de la Mujer](#)

3.3. POLÍTICAS PÚBLICAS TRIBUTARIAS PARA FAVORECER LA IGUALDAD

Como es sabido, un sistema fiscal está formado por diferentes tributos; los impuestos directos, tales como los impuestos sobre la renta de las personas físicas y los impuestos sobre las sociedades, o los impuestos sobre la nómina salarial el patrimonio (incluidos los bienes inmuebles), y las donaciones y sucesiones; los impuestos indirectos, que comprenden los impuestos sobre bienes y servicios y los impuestos sobre el comercio internacional, ya sea en forma de derechos de importación o de exportación. En España contamos con un sistema tributario dividido en los siguientes sustratos o niveles de gobierno: tributos propios o estatales, tributos cedidos a las Comunidades Autónomas por el Estado (en adelante CCAA), tributos autonómicos (propios de las CCAA) y tributos locales.

En Octubre de 2009, bajo la Presidencia Sueca de la UE, se celebró en Estocolmo una *Conferencia sobre las implicaciones de la igualdad de género para el crecimiento económico y el empleo*. Uno de los resultados más impactantes aportados en esta conferencia fue el arrojado por la estimación económica de cómo variaría el PIB si la igualdad entre hombres y mujeres estuviese plenamente integrada en el funcionamiento del mercado de trabajo. Åsa Löfström constataba que el promedio de crecimiento para el conjunto de la UE sería próximo a un 30%; y para España el crecimiento podría alcanzar hasta el 32%. En el caso de España, hay incluso otros estudios que cuantifican que el PIB podría crecer hasta un 44%, en un escenario caracterizado por la equiparación de tasas de empleo y por la eliminación de la brecha salarial (Reyes Maroto et al. 2011).

Según la reflexión crítica de María Pazos, en países como Dinamarca, Finlandia, Suecia o Nueva Zelanda, el sistema de impuestos y prestaciones se basa en el individuo. En estos países los matrimonios no se consideran como una fuente de desgravaciones fiscales ni de prestaciones de la Seguridad Social. Por otro lado, estos países tienen potentes prestaciones de desempleo y programas para ayudar a las personas que buscan trabajo a reciclarse y a encontrar un lugar en el mercado laboral. También dedican mucha atención (y dinero) a los hijos, y subvencionan fuertemente las guarderías. Las madres solas tienen prestaciones y desgravaciones especiales que complementan las ayudas universales por hijos. Es un sistema que considera a las mujeres como individuos independientes que normalmente desarrollarán una actividad laboral y vivirán de sus propios recursos. A la vez, se estima que la sociedad debe contribuir al mantenimiento de los niños y ser solidaria con las situaciones de necesidad como el desempleo o la pobreza.

Siguiendo el mismo análisis, en otros países, como Alemania, Francia o España, heredamos un sistema que aún no ha sido reformado. Aunque Francia y Alemania tengan un nivel de gasto social más alto que España, lo que ha permitido añadir prestaciones que protegen las situaciones de necesidad (muchas de ellas propiciadas por el propio sistema), estos países no se han

cuestionado los impactos de género ni la orientación del sistema en su conjunto. En ellos se toma a la familia como unidad contribuyente y perceptora de prestaciones.

Por otra parte, con relación a las medidas de ajuste aprobadas por los distintos Gobiernos de la UE en los últimos años, asociados a la crisis económica, en la creación de empleo y en el crecimiento económico, debería de reflexionarse desde una lógica no androcéntrica a quién afecta el recorte del gasto y el adelgazamiento del Estado de Bienestar. Así, la insuficiencia de los servicios públicos que mejoran la vida cotidiana, el cuidado de las personas, puede constituir un problema público cuya resolución depende de la propia madurez democrática. En segundo lugar, porque la vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar a la población, muy especialmente a los sectores poblacionales de menores niveles de renta, entre quienes son mayoría las mujeres. (Benería, L. y Sarasúa, C. 2010).

Por otra parte, es evidente que todas las medidas conducentes a la incentivación de la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo (materia que se detallará en el Módulo 4) guardan estrecha relación con las políticas públicas tributarias.

3.4. EL TRATAMIENTO DEL GÉNERO EN EL IRPF (TRIBUTACIÓN CONJUNTA O SEPARADA, DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD O NACIMIENTO DE HIJOS/AS, ETC)

(Este capítulo se redactará a partir de un resumen de la investigación denominada "Sobre el androcentrismo fiscal o sobre la ausencia de la perspectiva de género en las políticas tributarias españolas actuales", de Mercedes Ruiz Garijo Profesora Contratada Doctora de Derecho Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, publicado en la publicación Derecho, Igualdad

y Género, Cambios en las estructuras jurídicas androcéntricas """, del Centre Antigona, Universidad Autònoma de Barcelona.

Fuente: ["Sobre el androcentrismo fiscal o sobre la ausencia de la perspectiva de género en las políticas tributarias españolas actuales"](#)

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es hoy el impuesto más importante del sistema tributario español. Un análisis de la evolución normativa de estas políticas desde el franquismo hasta la década de los 90 aporta elementos cruciales para entender semejante abandono. Bajo el régimen de Franco se llevó a cabo una política familiar natalista y dirigida a perpetuar la familia tradicional de un sustentador y una esposa dependiente. Los mecanismos consistían en incentivos y persuasiones varios, como prestaciones por boda (dote), excedencias forzosas de las mujeres en la Administración y en las empresas públicas, prestaciones por cónyuge a cargo. Las ayudas se canalizaban a través de prestaciones monetarias y no del sistema de impuestos sobre la renta de las personas físicas, que prácticamente era inexistente.

Con la transición democrática se abandonaron la mayoría de las prestaciones de ese tipo de la Seguridad Social y se congelaron las prestaciones por hijos hasta 1990. Posteriormente, probablemente respondiendo a la percepción generalizada en la sociedad de que la atención a esta necesidad era escasa, las prestaciones por hijos se fueron actualizando en su cuantía, aunque siguen siendo reducidas.

El IRPF surgido de la reforma de 1978 se convirtió en el principal vehículo de la política familiar, con un desplazamiento de las prestaciones abandonadas (esencialmente por cónyuge a cargo) o congeladas en términos reales (por hijos) hacia desgravaciones en el IRPF. Entre estas desgravaciones por circunstancias personales y familiares, la desgravación por "esposa dependiente" (a través de la tributación conjunta) es, con gran diferencia, la más importante.

Ni el IRPF ni la Seguridad Social, ni la red de servicios públicos, han incorporado de forma mínimamente efectiva la protección de las nuevas necesidades y contingencias que se producen cada vez en mayor medida como producto de los cambios en formas de vida.

Recientemente, el IRPF ha sufrido una significativa y reciente reforma fiscal en nuestra patria: la contenida en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Patrimonio (BOE, de 29) (en adelante, LIRPF), cuyo desarrollo reglamentario aparece recogido en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (BOE de 31). Sobre ello, ha habido otras "mini reformas", con fuerte impacto sobre la igualdad, como sucede con la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el IRPF y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción (BOE de 16).

La razón por la que debe estudiarse el IRPF de manera individualizada desde el punto de vista del género ha de hallarse en su generalidad, importancia recaudatoria y por los efectos económicos que genera (oferta de trabajo, "trampa de la pobreza", etc.).

El IRPF español nace en sus orígenes como un impuesto sintético (artículo 1º Ley 44/1978), su pretensión era tratar a todas las rentas de manera similar, independientemente de la naturaleza y origen de las mismas, y personal, al ser un impuesto que no puede ser pensado sin ponerse en relación con una determinada persona. La unidad contributiva y centro de imputación de rentas fue la "unidad familiar" a la cual quedaban sometidos obligatoriamente todos los sujetos pasivos que formaran parte de la misma y en la cual se producía la acumulación de todos los rendimientos e incrementos de patrimonio de todos los miembros de la unidad familiar, cualquiera que

fuera el régimen económico del matrimonio. El anterior tratamiento dado por la legislación tributaria a la familia constituía una fuente de continuas discriminaciones y altercados a los contribuyentes que, obteniendo más ventajas tributando individualmente, se veían obligados a tributar conjuntamente por el solo hecho de formar una familia.

Afortunadamente el Tribunal Constitucional puso fin a esta situación con la **Sentencia 45/89, de 20 de febrero de 1989**, en la que se declara la tributación conjunta como una opción y no como la obligación como anteriormente existía, con la consiguiente declaración de inconstitucional de determinados artículos de la Ley.

Con el anterior pronunciamiento del Alto Tribunal se pone fin a muchos años de "sometimiento fiscal" de las mujeres, pues, la individualización del impuesto no sólo significa una mejora económica de las mujeres casadas sino también la ruptura de la responsabilidad solidaria con su marido pues, según el alto Tribunal: "La declaración única y conjunta de los esposos, impone a cada uno de ellos el deber de denunciar ante la Hacienda Pública las incorrecciones en la estimación de sus propias rentas, introduce un elemento de discordia en el seno familiar, violentando la intimidad de las personas..." .



Para consultar

Fuente: [Sentencia del Tribunal Constitucional de 45/89, de 20 de febrero de 1989](#)

En él, a la hora de fijar la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, se tienen en cuenta determinadas circunstancias personales y familiares como, por ejemplo, la pertenencia a una unidad familiar o el hecho de haber tenido descendencia (o haber adoptado) en el periodo impositivo de referencia.

El régimen de tributación conjunta es un régimen fiscal que cuenta ya con algunos años de existencia y que no se ha adecuado a las realidades sociales actuales ni al avance de la mujer como colectivo.

Por una parte, los nuevos modelos de familia surgidos con la emancipación de la mujer no encuentran su lugar en este régimen de tributación que queda reservado a los siguientes **modelos de unidad familiar** (artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF):

- Cónyuges no separados legalmente junto a los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos; y junto a los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
- Para los supuestos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, se considera unidad familiar la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan las características anteriores.

Como puede observarse, quedan fuera de la posibilidad de tributar de forma conjunta las parejas de hecho y otras familias monoparentales, lo que parece una falta de adaptación a los nuevos modelos de familia.

El **régimen de tributación conjunta**, desde sus orígenes, se ha configurado como un sistema de menor contribución en aquellos casos en los que un solo cónyuge sea el perceptor de las rentas de la unidad familiar (en un alto porcentaje dicho perceptor ha sido y parece seguir siendo el esposo) Como recuerda CARBAJO VASCO "nuestra "tributación conjunta", no lo olvidemos, fue creada (...) para proteger a un modelo de familia centrado en un marido generador de la mayor parte de las rentas y una mujer, cuyos ingresos o tenían un carácter marginal para el presupuesto familiar o directamente entraban en el mercado de trabajo sumergido y, en consecuencia, no se declaraban en el gravamen. De esta forma, la medida de la contribución de la unidad familiar es menor en el caso de que la mujer casada desempeñe trabajos domésticos dentro del hogar. En este caso, el

legislador ignora la distribución de la renta dentro del hogar familiar y la valoración del trabajo doméstico.

Algunos autores, entre ellos Gustaffsson, califican la tributación conjunta como una opción con muchas connotaciones negativas. Este autor propone como modelo ideal el sistema sueco de tributación individual para nuestro país. El sistema consiste en la igualdad en la tributación de toda la renta individual independientemente del estado civil de las personas. Los argumentos que esgrime este autor se basan en que cuando el sistema tributario es progresivo, la tributación conjunta disminuye los incentivos para que la mujer casada trabaje porque el primer euro fruto de su trabajo será gravado con el tipo impositivo marginal de la unidad familiar. De este modo, cuanto más progresivo sea el sistema tributario y mayores sean las diferencias en los ingresos procedentes del trabajo en los esposos, mayor será el efecto negativo de la tributación conjunta en comparación con la tributación individual.

Así, en el sistema actual español el contribuyente cuya esposa no obtiene ingresos fuera del hogar puede optar por la declaración conjunta y además tendrá derecho a la aplicación del mínimo personal de su esposa en lo que se ha denominado por PAZOS MORÁN como "la desgravación por esposa dependiente".

El trabajo de la mujer fuera del hogar y la obtención de ingresos son menos beneficiosos desde el punto de vista fiscal ya que se produce una acumulación de rentas y la aplicación de unos tipos progresivos que pueden llegar a ser hasta del 43 por ciento. En este caso la opción más beneficiosa es la tributación individual.

Por si fuera poco, tal y como pone de relieve PAZOS MORÁN existe en el IRPF una desgravación de enorme importancia en términos cuantitativos y que cumple un papel central en la imposición sobre las rentas del trabajo. Se trata de la reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo. Esta

reducción es decreciente con los citados rendimientos. En efecto, "si cada contribuyente pudiera aplicarse esa reducción a los rendimientos de su propio trabajo independientemente de los rendimientos de su cónyuge, esta desgravación constituiría un mecanismo que mitigaría, en parte, el efecto desincentivador del trabajo de las mujeres casadas que produce la tributación conjunta. Sin embargo, en caso de tributación conjunta, 'el importe de la reducción se determinará en función de la cuantía conjunta de los rendimientos netos del trabajo de todos los miembros de la familia, sin que proceda multiplicar el importe de la reducción resultante en función del número de miembros de la unidad familiar perceptores de rendimientos del trabajo' (Agencia Tributaria, 2003).

Es decir, una mujer casada con un hombre que gana más de 8.500 euros, y que se incorpore al mercado de trabajo, no podrá desgravar ya absolutamente nada por su propio salario. Al contrario, su salario originará una penalización, pues disminuirá la desgravación 'familiar' por rendimientos del trabajo en lugar de aumentarla".

Se podría afirmar que la ineficiencia y la falta de equidad en el régimen de tributación conjunta se producen con independencia del sexo del cónyuge que desempeña las tareas domésticas. Ello es cierto. Sin embargo, la agravante de este tratamiento fiscal lo constituye el hecho de que la no percepción de ingresos y la no realización de trabajos fuera del hogar al día de hoy siguen afectando al colectivo de las mujeres en mayor proporción que al de los hombres.

Las deducciones por maternidad y por nacimiento y adopción de hijos establecidas por el legislador fiscal son también muestra de androcentrismo, pues parecen seguir respondiendo a una idea de mujer como colectivo cuidador e incluso "responsable" de la natalidad del país, pues establecen una especie de "premio" para las mujeres madres y adoptantes:

A) La deducción por maternidad, que sigue en vigor. Está prevista para aquellas mujeres con hijos menores de tres años que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad (en los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil). En estos casos, las madres podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales (artículo 81 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del IRPF. Esta deducción, según la opinión de la profesora Ruiz Garijo, es también una manifestación del androcentrismo fiscal del legislador porque:

- Si se entiende que su justificación es compensar económicamente por el hecho de la maternidad, no entendemos sin embargo por qué su aplicación no está prevista también para los padres (solamente en el caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se atribuya de forma exclusiva al padre o, en su caso, a un tutor, éste tendrá derecho a la práctica de la deducción pendiente).
- Si, por el contrario, se entiende que su justificación es favorecer la incorporación de la mujer al mercado (ya sea laboral o por cuenta ajena) también debería extenderse a las mujeres con hijos mayores de tres años.

Sea como fuere, la principal cuestión está en analizar qué eficacia tiene en la práctica esta deducción fiscal. Téngase en cuenta que su importe es de hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años calculándose de forma proporcional al número de meses en que se cumplan de forma simultánea los requisitos previstos en la ley. Además, tiene como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con posterioridad al nacimiento o adopción. En definitiva, parece tratarse

de un "reembolso" cuya cuantía no creemos que incentive la incorporación de la mujer al mercado. Y es universal, pues afecta a toda la población sea cual sea el nivel de renta.

- B) Una deducción por nacimiento o adopción de hijos (2.500 euros por hijo), llamada popularmente el "cheque-bebé" y que fue suprimida por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Al igual que en el caso anterior, esta deducción estaba pensada para la madre representando, así, a juicio del legislador, una medida de apoyo a las familias lo cual, a nuestro entender, puede resultar discutible, como se verá inmediatamente. En efecto, tanto en el caso de nacimiento como de adopción por personas de distinto sexo tenía derecho a la deducción la madre, no el otro progenitor, salvo que falleciera la madre sin haber solicitado la prestación o la percepción anticipada de la deducción (art. 81 bis de la *Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF*).

En el mismo sentido, se establecían dos requisitos para que se tenga derecho a la deducción:

- la persona beneficiaria deberá realizar una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad en el momento del nacimiento o la adopción y
- la persona beneficiaria deberá haber obtenido durante el período impositivo anterior rendimientos o ganancias de patrimonio, sujetos a retención o ingreso a cuenta, o rendimientos de actividades económicas por los que se hubieran efectuado los correspondientes pagos fraccionados.

En todo caso, también manifestamos nuestras dudas en cuanto a la eficacia de la medida como instrumento de apoyo a las familias en tanto que la cuantía de la deducción no depende de las rentas obtenidas por las familias beneficiarias. La deducción se desvincula de los ingresos

familiares con lo que, en consecuencia, su eficacia es, como decimos, muy reducida.

Otra medida en las que se observa el androcentrismo fiscal en IRPF es **la asignación de rentas de empresas familiares del artículo 11.4** de la LIRPF. Según este precepto, los rendimientos de las actividades económicas se consideran obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades. Es decir, tratándose de empresas familiares, se atribuye la renta a quien de forma efectiva desempeña dicha actividad que suele ser el esposo (según los datos del INE referidos al año 2008, el número de trabajadores por cuenta propia es casi el doble que el de trabajadoras por cuenta propia).

No obstante, como contrapartida se establece la deducibilidad de las cantidades pagadas al cónyuge o los hijos menores del contribuyente que convivan con él, trabajen habitualmente y con continuidad en las actividades económicas con el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Igualmente el **artículo 30.5 de la LIRPF considera gasto deducible de los rendimientos de actividades económicas las primas de seguro de enfermedad** satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él (con el límite máximo de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente). Teniendo en cuenta, también, quiénes realizan actividades económicas en la actualidad, el sesgo de género implícito parece evidente.

Lo mismo se podría decir de la medida contemplada en el artículo **51.7 relativa a la reducción por aportaciones a mutualidades de previsión social y a planes de previsión asegurados**: «los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades

económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 2.000 euros anuales».

También, el hecho de que el pago de una pensión compensatoria sirva para reducir la base imponible mientras que la percepción de una pensión de alimentos por hijo/a sea computada como un rendimiento de trabajo.

Por otra parte, siempre tendrá un **impacto de género cualquier variación en el tipo marginal mínimo de la imposición sobre la renta** afecta mayoritariamente a las mujeres, mientras que toda alteración de los tipos marginales últimos afecta en mayor medida a los varones, perceptores de rentas laborales superiores. Por tanto, es incuestionable que toda reforma impositiva en la línea de la reforma fiscal implícita en la Ley 40/1998, reduciendo los tipos marginales más elevados de la escala de gravamen, tiene un marcado impacto de género y beneficia claramente a los hombres, y viceversa.

La última reforma practicada en IRPF ha tenido lugar mediante el *Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad*. La misma ha afectado a los tipos, a las retenciones sobre rendimientos de trabajo y profesionales, etc.

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)

3.5. EL TRATAMIENTO DEL GÉNERO EN OTROS IMPUESTOS

De acuerdo con el estudio realizado por Ana López Pérez, Profesora titular de Florida Universitaria, Centro adscrito a la Universidad de Valencia, en su trabajo *"Tratamiento de las desigualdades de género en el ámbito jurídico-tributario"*, pueden observarse los siguientes "sesgos de género" en distintos impuestos.

3.5.1. IMPUESTO DE PATRIMONIO

En el Impuesto sobre el Patrimonio, la asimetría existente en el tratamiento fiscal de la "empresa familiar" beneficiaba en mayor proporción a hombres que a mujeres, lo que suponía claramente una discriminación. Dicha asimetría se manifiesta en quienes poseyendo individualmente al menos el 15% de la entidad no se pueden acoger a la exención propia de aquellos que gestionan la empresa, que son en su mayoría hombres.

Este Impuesto ha sido eliminado por el Consejo de Ministros en 2008.

3.5.2. IMPUESTO DE SOCIEDADES

La asimetría del Impuesto sobre Sociedades se traduce en la falta de incentivos para la creación de empleo, con excepción de las personas con minusvalía, en contraste con la generosidad con que se conceden otras deducciones. La contratación de trabajadores con escasa representación en el mercado de trabajo como son las mujeres, los/las mujeres mayores de 40 años, jóvenes en paro, los/las parados de larga duración...etc. requiere de un tratamiento más adecuado en el Impuesto de Sociedades del que se otorga en la actualidad.

Otro beneficio fiscal de este Impuesto puede ser incluido como ejemplo de medida extrafiscal que pretende favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Si bien, puede considerarse que no se encuentra vinculado directamente con la mujer, sí que puede tener un efecto favorecedor de su integración laboral si se considera que todavía se asocia la tarea de atender a los hijos con el sexo femenino y que la integración laboral de este colectivo es inferior a la masculina. El art. 38.6 de la LIS prevé una deducción de 10 por 100 en la cuota íntegra de las inversiones y gastos en locales homologados por la Administración para prestar un servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de los trabajadores de la persona jurídica-contribuyente y

de los gastos en el caso de contratación de este servicio con un tercero autorizado. Se trata de una deducción extrafiscal pues no es tanto para adaptar el tributo a la capacidad económica del contribuyente como para premiar fiscalmente a aquellos empresarios que dediquen una parte de sus beneficios a cubrir el gasto que supone la atención a los hijos de sus trabajadores.

Algunas voces (como el profesor de Derecho Financiero de la UAB don José Antonio Fernández Amor) sugieren En primer lugar cabría regular medidas de gravamen impositivo adicional para aquellas entidades – especialmente empresas- que no llevasen a cabo políticas dirigidas a favorecer la integración de la mujer en puestos de dirección de su organización. Este objetivo podría ser perseguido de dos maneras. A través del incremento de la fiscalidad de aquellas entidades que no realizasen políticas de igualdad en este aspecto. También beneficiando fiscalmente a aquellas que las llevasen a cabo más allá de lo que la ley obliga.

3.5.3. IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se necesita, más que nunca, una modificación para eliminar la tributación sobre la transmisión "mortis causa" de la vivienda habitual, así como la suficiencia de cualquier prueba admitida en Derecho para reivindicar la exoneración del impuesto por quienes convivan, con independencia de la relación de parentesco con el causante.

La actual Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas mejora, en cierta medida, las competencias normativas asumibles por las CCAA sobre tributos cedidos, (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) y ello supone una ampliación de las posibilidades con que cuentan las CCAA para mejorar la situación de las mujeres en los referidos tributos.

3.5.4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) podemos encontrar algunas exenciones con gran trascendencia desde la perspectiva de género: en ejemplo lo constituye la contemplada en el artículo 20 de la Ley del Impuesto, apartado 9, relativa a la educación de la infancia y la juventud, guardia y custodia de niños, enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados. Asimismo es interesante la fiscalidad de los productos de higiene íntima femenina y tan destacable como esperada su reducción en el tipo aplicable (cuando se aplicó, se bajó del tipo general del 16% al 7%); reducción lógica desde la sensibilidad de un análisis de género.

La última reforma de este impuesto se ha producido a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que ha llevado a cabo aumento de tipos impositivos:

Fuente: [Boletín Oficial del Estado](#)



Para consultar

Puedes acceder al artículo llamado "La desigualdad de género en el sistema de impuestos y prestaciones en España", de Carmen Castro García y Bibiana Medialdea García, dentro del Documento de Trabajo 43 publicado por la Fundación Carolina (monográfico de Fiscalidad y género) y dirigido por María Pazos y Maribel Rodríguez.

Fuente: ["La desigualdad de género en el sistema de impuestos y prestaciones en España"](#)

También se puede consultar dentro de la página del Instituto de Estudios Fiscales el apartado de Política Fiscal y Género.

Fuente: [Instituto de Estudios Fiscales](#)

Puede leerse la interesante investigación La Economía invisible y las Desigualdades de género (La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado), publicado por la Organización Panamericana de Salud en 2008.

Fuente: ["La Economía invisible y las Desigualdades de género"](#)

Las cifras hablan...**%**

En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2006 se podía leer que: "El presupuesto para el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres será de 38,27 millones de euros, un 5.45% más que en 2005. Para 2013, las políticas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, están constreñidas a dos programas presupuestarios, ambos inscritos en el macro Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Los dos programas, políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (programa 232 B) y actuaciones para la prevención integral de la violencia de género (programa 232 C), suman un total de 41.150.150€ para 2013, que supone el 0,0108 % del total del presupuesto consolidado. Cada uno de ellos está dotado con las siguientes asignaciones presupuestarias: 232.B "igualdad de oportunidades" 18.952.810 € (0,0050% de los PGE) 232.C "contra la violencia de género" 22.197.340 € (0,0058% de los PGE). Nos encontramos con estas cifras, una minoración del presupuesto dedicado a los programas de igualdad y violencia del 15,67% respecto a las cifras de 2012.

%

El gasto fiscal (es decir, la pérdida de recaudación) por tributación conjunta en el IRPF era, según los PGE, de 2.379,41 millones de euros en 2006, un 14% más que en 2005. La tributación conjunta significa, en la gran mayoría de los casos (1), que un hombre casado con una mujer que no trabaja fuera de casa se desgrava (mediante la aplicación del "mínimo personal" de la esposa a su base imponible) una cantidad variable, mayor cuanto mayor es su nivel de renta. Por ejemplo, un hombre que gana 7.500 euros se desgrava,

según datos de 2003, 20 euros por el hecho de que su mujer no tenga ingresos, mientras que uno que gana 66.000 euros se desgrava 1.530 euros por el mismo concepto. En 2012, las reducciones en IRPF por tributación conjunta son de 3.400 euros, si se trata de unidades familiares formadas por los cónyuges, hijas e hijos, y 2.150 euros, cuando se trata de familias monoparentales (artículo 84 de la LIRPF). Se prevén 1494,01 millones de euros por este concepto en 2012, en los presupuestos generales del Estado.

%

España sigue siendo uno de los estados miembros de la Unión Europea con menor gasto público en protección social (20,9% del PIB en 2006, por debajo del 26,9% de media de la UE27). En 2009, el gasto público en protección social fue del 14,1% PIB.

Fuente: [CC.OO.](#)

%

En cuanto a ingresos, en España las ocupadas ganan aproximadamente un 30% menos que los hombres y, cruzando datos de la EPA con los de la Seguridad social, podemos ver que solo aproximadamente el 35% de las mujeres paradas en diciembre de 2008 recibían prestaciones contributivas (el 52% de los hombres); mientras que el 41% de las mujeres paradas se encontraban sin ningún tipo de prestación (el 32% de los hombres).

%

La pobreza en España (ingresos menores al 60% de la mediana de ingresos) en 2007 afectaba al 21% de las mujeres y al 18% de los hombres. La pobreza infantil supera la tasa del 24%, de las más altas de la UE; y respecto a los hogares unipersonales, también hay una mayor incidencia sobre las mujeres.

%

Son las mujeres las que ejercen como «cuidadoras no profesionales» en el entorno familiar (Ley de Dependencia): constituyen el 94,4%.

Cierre con perspectiva

Para apreciar la importancia de la regulación de las materias de Derecho Privado, puede leerse el artículo *"Lo personal es político. Una lectura de lo público y lo privado"*, de Bethsabé Nadía Pérez, publicado en Boletín Generando del Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género Año 1. N°10. Lima noviembre 2007. Incluye una reflexión sobre pensamientos de Hanna Arendt y Celia Amorós en torno a los espacios público y privado.

Fuente: [Lo personal es político. Una lectura de lo público y lo privado](#)